

El gobierno de la decadencia de Europa

Crisis, integración y nueva derecha radical

Nuria Alabao y Pablo Carmona

Las señales de crisis en Europa se multiplican. A pesar de ello, dentro de la Unión Europea cuesta comprender ese proceso complejo al que damos el nombre de crisis. Ciertamente los estándares de vida, apuntalados por los distintos aparatos estatales, se mantienen, aunque sea deteriorados, mientras que los síntomas del declive social, energético, militar y geopolítico se hacen cada vez más evidentes.

Desde hace ya décadas, se percibe la erosión del modelo de redistribución creado a partir de 1945, también del modelo de acumulación que protagonizó aquellos años de crecimiento sostenido y pleno empleo (1945-1973). La larga ruptura de los años setenta y la crisis financiera de 2008, constituyen los dos hitos más reconocibles de esta decadencia. En ambas crisis —como ha señalado Susan Watkins—,¹ se ha jugado la viabilidad misma del proyecto europeo, así como su posición global frente a la potencia norteamericana y los gigantes asiáticos (China e India). De momento, parece que la Unión Europea ha sobrevivido a una larga fase de estancamiento —cuando no de sostenido deterioro—, que sin embargo podría preceder a turbulencias de mayores dimensiones.

Por eso, en este artículo no se trata de anunciar una quiebra en un sentido filosófico o teórico, desde un europeísmo siempre melancólico e inocente. Antes bien, las grietas de la Unión se producen sobre las bases mismas de

¹ Susan Watkins, «La triple torsión de Europa», *New Left Review*, núm. 90 (edición española), enero-febrero de 2015.

su capacidad para la reproducción e integración de sus poblaciones. Entendemos esta idea de integración en un doble sentido. En primer lugar, esta es definida como un mecanismo de incorporación o adscripción política —incluso subjetiva si se quiere— de las distintas poblaciones dentro de los aparatos de Estado, según el viejo patrón al que se le dio el nombre de sociedad civil. En segundo lugar, integración es sinónimo de distribución de ciertas cotas de bienestar; es la fórmula de estabilización social que engrasa las capacidades de gobierno

En este artículo, se trata así de dirigir la mirada sobre el sustrato material donde se juega la política europea, en tanto política de integración y cohesión social, en tanto modelo de redistribución y reparto de ciertas cotas de bienestar material. Pero también entendiendo que la crisis europea se produce en el viscoso terreno del reparto diferencial, de la exclusión de ciertos colectivos sociales. En el largo recorrido, la cuestión consiste en analizar cómo se despliega la crisis europea, los procesos relativos de estabilización y las formas de gobierno.

Tras las décadas doradas de la Europa occidental de la posguerra y la llegada de la larga crisis del modelo europeo, vivimos en una fase de atonía donde la mayoría de los equilibrios sociales todavía parecen mantenerse. Curiosamente en este panorama de «calma chicha», y tras los últimos episodios críticos de 2008 y el covid-19, el actor que parece tener una propuesta alternativa de gobierno son las nuevas derechas radicales. Presentadas como una tendencia política sólida, por diversa que sea, las nuevas derechas representan la única línea de propuesta política en un campo de batalla que —dando por buena la máxima del situacionista francés Guy Debord— «nunca había estado tan vacío». Vacío por la dispersión y la falta de una oposición por parte de movimientos dispuestos a defender un marco radical de redistribución de la riqueza.²

En este contexto, por lo tanto, los movimientos de las nuevas derechas radicales parecen los únicos capaces de agitar políticamente y crecer en términos electorales. De hecho, ya con presencia parlamentaria significativa en todos los contextos nacionales, en los últimos quince años estas derechas han obtenido destacadas victorias como la de Viktor Orban en Hungría —presidente del país desde 2010—, la del partido Ley y Justicia (PiS) en Polonia —que gobernó ese país desde 2015 hasta el 2023— o la de Giorgia Meloni de Hermanos de Italia —en el gobierno desde el 2022—. Estas derechas también

² La última gran ofensiva de los años setenta y ochenta del siglo XX, solo superada parcialmente en el cambio de siglo por el movimiento antiglobalización, descompuso sus espacios en un mar de pequeñas experiencias, colectivos y partidos de distinta entidad que —siempre desde una escala nacional—, no se han recuperado tras la crisis de 2008. Solo anomalías como el 15M en España, el movimiento de la plazas griego, la onda global feminista o —fuera del marco de la izquierda— los chalecos amarillos en Francia rompieron relativamente esa tendencia en estos años. Véase Göran Therborn, «Los futuros de la izquierda», *New Left Review*, núm. 145 (edición española), marzo-abril de 2024, p. 33.

forman parte de gobiernos de coalición, o en otros casos los condicionan, tal y como ocurre o ha ocurrido en Suecia, Finlandia, Austria, Países Bajos o Eslovaquia y más recientemente en Países Bajos, donde los liberales han formado gobierno con Geert Wilders. E igualmente son destacables los resultados de Agrupación Nacional (AN) con Marine Le Pen en Francia —primer partido en las últimas europeas— o el reciente triunfo del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) de Herbert Kickl, en 2024.

La incógnita que abren estas victorias, o las que puedan producirse en un futuro, es directamente proporcional a su capacidad (o no) de promover un programa de gobierno eficaz en el marco de la crisis europea. La pregunta que se plantea en estas páginas es, por lo tanto, si las nuevas derechas van a ser capaces de elaborar una doctrina capaz de modificar las bases de integración, reparto y redistribución sobre las que se fundamentó la Europa de posguerra.

Para responder a esta cuestión es importante reconocer que en términos políticos, para una parte importante de la población, el principal conflicto europeo se representa como un enfrentamiento entre las fuerzas tradicionales de la supuesta «normalidad democrática» —con los socialdemócratas y los demócratacristianos como principales representantes— y las distintas propuestas de derecha radical. Pero ¿se trata realmente de dos extremos enfrentados? ¿Estamos ante un fenómeno comparable al de los fascismos de los años treinta del siglo XX? ¿Se puede decir que existe en Europa una ola fascista capaz de gobernar la crisis continental por vías autoritarias en el corto plazo?

La cuestión central es, por eso, si estas fuerzas de derechas serán capaces de encauzar un nuevo modelo de gobierno, desarticulando el marco institucional y político construido desde 1945. O si, por el contrario, la crisis europea va a ser gobernada en una línea más bien continuista, a partir de las matrices que constituyen políticamente a la Unión Europea. En este sentido, conviene recordar que el autoritarismo político es una constante en la historia de la Unión, y que formas de gobierno extremadamente autoritarias fueron ya ensayadas con toda su crudeza a raíz de la crisis económica de 2008. En última instancia, se trata de averiguar si la crisis va a tener una solución continuista o si va a caminar hacia soluciones de carácter neofascista, como parece entenderse de la línea hegemónica de análisis de las nuevas derechas radicales.

Para responder a estas cuestiones, se plantea un breve recorrido por la historia reciente de Europa. Tomada en serio, la nueva Europa que promete la derecha radical anuncia un retorno a Estados nación independientes, con moneda propia y aparente soberanía económica. Caso de que esto se llevase a cabo asistiríamos al fin de la Europa keynesiana, pero también de la constitución neoliberal —o si se prefiere ordoliberal— de la Unión Europea desde 1992.

El problema aquí es que si nadie sabe muy bien como empujar una revolución en Europa, tampoco parece sencillo construir una contrarrevolución. De hecho, uno de los fenómenos que se va analizar en detalle es la única gran contrarrevolución europea vivida desde 1945 protagonizada por el *thatcherismo* en la década de 1980. Aquella virtuosa alianza, dentro de la onda

larga del neoliberalismo, entre el conservadurismo anglosajón y la «Escuela de Chicago» obtuvo notables éxitos electorales. Hoy, no obstante, la situación es distinta y no parece que las nuevas derechas dispongan de un cuerpo ideológico y político capaz de superar aquel modelo que logró desviar radicalmente las bases de la reconstrucción de la Gran Bretaña de posguerra.

De momento, parece que los distintos movimientos de derecha radical tienen poco que ver con sus supuestos inspiradores fascistas. Cabría decir incluso que —en la mayor parte de los casos—, siguen debiendo más al viejo conservadurismo europeo que a ninguna otra familia política. Además, entre estos partidos de derecha radical existen demasiadas diferencias que hacen dudar de su capacidad de representar una estrategia unificada. Por ejemplo su «patriotismo antiglobalista» y su marcado «discurso antielitista» les aleja del programa económico de la contrarrevolución neoliberal —tratados de libre comercio, globalización—, y muy especialmente de las estrategias de financiarización de la economía de las décadas de 1980 y 1990.

Por no seguir más en la argumentación vamos a avanzar una hipótesis. Los nuevos autoritarismos europeos no se van a imponer al modo de los viejos fascismos, sobre la base de un populismo violento y juvenil, fundado en la sacralidad de la soberanía y la autonomía de los Estados y de sus respectivas economías nacionales. De hecho, las soflamas incendiarias de la nueva derecha radical tienen difícil superar los propios sistemas institucionales europeos, diseñados específicamente en términos autoritarios. Antes bien, van a ser los propios mecanismos financieros globales los que determinarán los márgenes de maniobra del conjunto del sistema europeo, así como de todos sus Estados. La cadena de mando del difuso gobierno de las finanzas parece que va a seguir gobernando por encima de los sistemas nacionales, de las diferencias entre partidos y de las distintas sociedades civiles europeas. Las nuevas derechas radicales también lo saben y esta constituye su principal contradicción, lo que devuelve una y otra vez al centro del tablero al verdadero agente de la crisis capitalista en el continente: el proceso de integración de la Unión Europea.

I

En su ensayo sobre las consecuencias económicas de la paz, John Maynard Keynes sentenció así el Tratado de Versalles: «Si la guerra civil europea ha de acabar en que Francia e Italia abusen de su poder, momentáneamente victorioso, para destruir a Alemania y Austria-Hungría, ahora postradas, provocarán su propia destrucción».³ Veintiún años después, la profecía se cumplía. Tras su famoso paseo por París, Adolf Hitler ordenaba llevar el vagón donde se firmó el acuerdo que ponía fin a la Primera Guerra Mundial al bosque de Compiègne. Allí el Mariscal Pétain firmó el armisticio que sellaba la capitulación de Francia ante la invasión nazi.

³ John Maynard Keynes, *Las consecuencias económicas de la paz*, Barcelona, Crítica, 2002.

Keynes acertó en lo que se refiere a dos elementos clave que podrían haber ayudado a pacificar Europa. Primero, señaló la necesidad de reconstruir la economía alemana en vez de hundirla con indemnizaciones inasumibles o la confiscación de propiedades. Para Keynes, las reparaciones llevarían a Alemania a una situación de miseria y humillación y se volverían tarde o temprano en contra de Europa. Y segundo, apostilló que la economía europea y su desarrollo en términos económicos dependía de la necesaria colaboración del eje franco-alemán y la fortaleza económica alemana. Para el economista de Cambridge, Europa debía reconocer sus vínculos económicos e integrar al conjunto de su población con mayores niveles de bienestar y consumo. Al considerar las tablas de exportaciones e importaciones en el año 1913 se podía comprobar que Alemania, Inglaterra, Francia y el resto de países de Europa occidental formaban *de facto* una red económica interdependiente difícil de romper sin consecuencias nefastas para todas las partes.

En los momentos inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, aun no estaba claro que se hubiese aprendido esta lección. En 1946, con la guerra ya finalizada y con buena parte del continente devastado, la historia estuvo a punto de repetirse. El 26 de abril de 1946, los jefes de Estado Mayor del ejército de Estados Unidos presentaron la conocida como «Estrategia Morgenthau», que volvió a la senda del castigo y empobrecimiento de Alemania como respuesta a los desastres provocados por la guerra.⁴

En un primer momento, los «realistas» americanos —con Morgenthau a la cabeza—, estuvieron a punto de imponerse, pero finalmente el resultado fue otro muy distinto. La competencia por la hegemonía con la URSS, la apuesta por configurar un nuevo marco para Alemania occidental y la pacificación por la vía de la integración en el nuevo sistema de relaciones internacionales promovido por Estados Unidos, marcaron un nuevo rumbo. En el verano de 1947, George Marshall dio luz verde a la directiva militar JCS 1779 que reconocía la necesidad de reconstruir el tejido productivo europeo incluyendo la minería y la industria alemana como piezas fundamentales.

El Presidente Harry Truman dio así comienzo al camino de la reconstrucción. La conocida como «Doctrina Truman» apostó por la integración económica internacional bajo el dominio de Estados Unidos y el dólar. Esta nueva perspectiva fijó las bases del sistema internacional de mercado que en cierta medida perdura hasta la actualidad y que tuvo su reflejo concreto en la construcción de las nuevas instituciones europeas y sus distintos Estados del bienestar.

Los primeros signos de este cambio de relaciones en la posguerra estuvieron en las denominadas Naciones Unidas para la Ayuda y Rehabilitación de Europa. Creadas en 1945, distribuyeron más de 25.000 millones de dólares entre los países europeos (437.385 millones de dólares de 2024). Pero no fue

⁴ Tony Judt, *Posguerra. Una historia de Europa desde 1945*, Madrid, Taurus, 2006, pp. 166 y ss.

hasta junio de 1947 cuando el Secretario de Estado George Marshall anunciara el conocido como «Plan Marshall» que, a diferencia del primer plan, se acompañó de políticas planificadas de industrialización. Bajo el nombre de European Recovery Programme (ERP) y con un plazo para su ejecución de cuatro años que iba de abril de 1948 hasta 1953, se distribuyeron más de 24.000 millones de dólares que iban a ser gestionados por el primer organismo común de la nueva Europa occidental, la OECE (Organización Europea para la Cooperación Económica).⁵

Estados Unidos invirtió con estos planes una cifra equivalente al 2 % de su PIB en reconstruir económicamente Europa occidental. El resultado fue un crecimiento de un 35 % de la producción industrial europea en los siguientes cuatro años.⁶ El despegue económico ratificó la centralidad de Alemania occidental como pivote de la nueva construcción europea en alianza con Francia.

II

Al «Plan Marshall» siguieron los llamados treinta gloriosos. En ese lapso de tiempo se inició una segunda fase de integración, que conectó las economías nacionales y las puso a producir en un horizonte político común. El objetivo, evitar nuevas conflagraciones mundiales. Estados Unidos no estaba dispuesto a afrontar más guerras a gran escala provocadas por las tradicionales luchas de hegemonía entre las ahora pequeñas potencias europeas. Los planes del «hermano americano» eran mucho más ambiciosos, afrontaba el desafío de las nuevas fuerzas comunistas, y necesitaba que Europa occidental y Japón jugaran un papel medular en el bloque antibolchevique. Tanto la expansión del bloque soviético por el mapa de Europa oriental como la guerra de Corea en 1950, y la futura formación de la China comunista, anunciaron una nueva época de disputa por el mundo y de conformación entre las respectivas áreas de influencia de EEUU y la URSS.

La Guerra Fría forzó a construir sistemas internacionales capaces de expandir y dar consistencia a los mercados capitalistas. Los Acuerdos de Bretton Woods de 1944, por los que se crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) fueron la antesala de los Acuerdos Generales de Libre Comercio (GATT) firmados en 1947. El objetivo de todos ellos era unificar los sistemas comerciales y de cambio monetario, liberalizar los mercados y dolarizar las economías occidentales en busca de un sistema comercial global, de circulación y acumulación de capitales sobre el que Estados Unidos tuviese el control.

Para Europa occidental —que entonces incluía a Alemania occidental, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo e Italia— esta red de relaciones se

⁵ Derek H. Aldcroft, *Historia de la economía europea (1914-1980)*, Barcelona, Crítica, 1989, pp. 176 y ss.

⁶ Yanis Varoufakis, *El minotauro global. Estados Unidos, Europa y el futuro de la economía mundial*, Madrid, Capitán Swing, 2012, pp. 110 y ss.

concretó en la creación de la Unión Europea de Pagos (1950), la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1952), la Comunidad Económica Europea (1957), así como la Asociación Europea del Libre Comercio (1959). Todas estas entidades sellaron la integración de los seis principales países europeos y la internacionalización de sus economías a partir de los tejidos industriales reflotados durante la posguerra.

A la hora de calibrar su éxito, podemos considerar algunos datos.⁷ En 1951 el índice de producción industrial de Austria fue 66 puntos porcentuales superior al de 1938. En el caso de Francia 34 puntos, en el de Italia 38 puntos y en el de Reino Unido 55. Sin embargo, este crecimiento industrial no tuvo su reflejo en la recuperación de la producción agrícola, que en 1951 seguía apenas con los mismos índices de producción que en 1938. Tampoco tuvo una repercusión directa en el aumento de la renta per cápita, que entre 1938 y 1951 apenas aumentó un 10 % en Países Bajos y menos de un 15 % en países como Gran Bretaña, Dinamarca o Francia, mientras que Italia y Alemania se mantenían todavía por debajo de los niveles previos a la guerra.

La industrialización europea de posguerra planteó así tres problemas sociales clave. La necesidad de reconfigurar el sector agrícola en crisis, la necesidad de equilibrar una economía pujante con niveles de pleno empleo, pero con un reparto de rentas aún limitado, y la reconstrucción y ampliación territorial y urbana, incluida la cuestión de la vivienda. Se puede decir que todos estos asuntos tuvieron un mismo hilo conductor: el factor demográfico. Como veremos más adelante, la demanda de mano de obra industrial movilizó a la población rural, tanto la emigrada del campo a la ciudad dentro de sus propios países, como también —como sucedió de manera masiva— la que emigró desde los países del sur de Europa hacia el norte. La demanda de mano de obra por parte de una industria en expansión resultaba evidente: en 1960 en Bélgica el 50 % de los trabajadores trabajaba en la industria, en la RFA el 48 %, en Francia el 39 % y en Italia el 40 %.⁸

Semejantes transformaciones económicas y demográficas en tan corto lapso de tiempo no hubiesen sido posibles sin una dirección económica planificada por los Estados.⁹ El caso de Gran Bretaña resulta especialmente evidente. En la inmediata posguerra, el Banco de Inglaterra, la electricidad, el gas, el hierro y el acero, el carbón, los ferrocarriles y parte de algunas empresas como British Petroleum y Rolls Royce fueron nacionalizados. En términos globales, el 20 % de la industria británica pasó a manos del Estado con un gobierno —el de Clement Richard Attlee entre 1945 y 1951— que apostó por la construcción de un Estado de bienestar basado en los sistemas públicos de salud, educación, etc.

⁷ Derek H. Aldcroft, *Historia de la economía europea (1914-1980)*, Barcelona, Crítica, 1989, pp. 183 y ss.

⁸ Gerold Ambrosius y William H. Hubbard, *Historia social y económica de Europa en el siglo XX*, Madrid, Alianza editorial, 1992, pp. 78-79.

⁹ *Ibidem*.

En un porcentaje similar, Francia nacionalizó el sector de la energía, buena parte del sistema bancario y de seguros, además de empresas centrales como Renault, Berliet o Air France. Por su parte, Italia construyó un enorme sector público que incluía parte de la industria rescatada y nacionalizada del acero y el hierro, los astilleros, la construcción o el sector energético (gas y petróleo), de donde salieron estructuras empresariales públicas de gran volumen.

En general, en la reconstrucción de los Estados europeos se siguieron pautas similares a las marcadas en los años cuarenta por los conocidos «Informes Beveridge».¹⁰ Se trataba básicamente de aplicar un recetario de protección pública que incluyese subsidios de desempleo, jubilaciones o sistemas públicos de seguridad social, salud y educación. Solo Alemania optó por un camino un tanto distinto. Allí, la influencia de las tesis ordoliberales llevaron a poner en práctica la idea de que el Estado no debía intervenir en la economía productiva más que para evitar los monopolios. Fomento del libre mercado que llevó a la creación desde 1948 del Instituto de Crédito para la Reconstrucción, que funcionó como un banco de inversiones, si bien este país no impulsó políticas de nacionalización ni de planificación estatal. Aquí la cercanía entre la Escuela de Friburgo —en concreto de su principal inspirador Walter Eucken— y el gobierno de Ludwig Erhard sentaron las bases de un modelo económico distinto, la denominada economía social de mercado, teorizada por Alfred Müller-Armack y que tanta centralidad tomaría en la conformación del modelo económico europeo en las siguientes décadas.

Este triple proceso de inversión, industrialización y creación de Estados con una fuerte planificación económica llevaron a un crecimiento sostenido de la economía. Los datos de las décadas de 1950 y 1960 así lo demuestran. Entre 1950 y 1970, el PIB de los países de Europa occidental creció a un ritmo del 5,5 % anual y en los sectores industriales la media fue del 7,1 %. En la década de 1950 la tasa media de paro fue del 2,9 % y durante la de 1960 bajó al 1,5 %, salvo excepciones como las de Italia o Bélgica, que superaron el 2 %.¹¹

En términos de PIB per cápita en aquellas dos décadas los incrementos superaron el 4,4 % anual y solo la agricultura perdió peso en este reparto. De hecho, la recomposición del sector agrario fue una de las claves de la propia construcción europea, aunque no se lograría un pacto estable hasta los años sesenta. En este sector había aspectos difíciles de abordar, como la reorganización productiva a escala continental y el desplazamiento poblacional masivo del campo a la ciudad.

Para entender este asunto conviene considerar un solo dato: en 1973 la Organización Internacional del Trabajo estimó que entre Noruega, Austria, Suecia, Suiza, Francia y Alemania habían recepcionado cerca de 13 millones

¹⁰ Este nombre se debe a William Henry Beveridge, político inglés nacido en Bengala. El más conocido de sus informes se titula «Social Insurance and Allied Services» (1942), encargado por el ministro de Trabajo de Churchill, Ernest Bevin, un sindicalista miembro del Partido Laborista.

¹¹ Derek H. Aldcroft, *op. cit.*, 1989, pp. 197 y ss.

de nuevos trabajadores, la gran mayoría del *Mezzogiorno* italiano,¹² que llegaron a significar dos terceras partes de la emigración del sur al norte de Europa. Pero estos trabajadores también provenían de España, de la que en aquellos años emigraron 2,7 millones de personas. A esto habría que añadir además los movimientos masivos campo-ciudad propios de cada nación. Especialmente reseñable es el retorno de europeos expulsados tras los procesos de descolonización. Entre ellos se cuentan el millón de repatriados de Argelia a Francia tras 1962, las 300.000 personas llegadas de Indonesia a Holanda o las 750.000 que recibió Gran Bretaña de sus excolonias.¹³ Pero también la llegada, durante las siguientes décadas, de personas migradas desde las distintas colonias y países del Sur global a Europa.

Europa dejó atrás esta fase de reconstrucción de posguerra ocupando una nueva posición global como potencia exportadora. Este salto para sus economías —según señala Milward— llevó a un rápido aumento del ahorro y la capacidad inversora. Así en aquellas dos décadas y hasta los años setenta, las exportaciones de los países de Europa occidental crecieron a un ritmo anual de entre el 8 % y el 9 %, con resultados superiores en países como Alemania e Italia, pero también significativo para países con menor recorrido exportador como Reino Unido, que se quedó en el entorno del 5 %.¹⁴

En términos sociales, este crecimiento de las décadas compuso imágenes realmente complejas y todavía infravaloradas. Tal y como señalan Ambrosius y Hubbard, la idea del hombre-maquina indiferenciado de películas como *Metrópolis* y *Tiempos modernos* no encajaban con las nuevas clases trabajadoras europeas, al menos no explicaban su enorme complejidad y diversidad. La propia necesidad de escalar y gestionar la producción con nuevas formas de organización del trabajo y de división internacional del mismo, produjeron una nueva configuración de las clases trabajadoras y del proletariado, muy distintas de las que se manejaban en aquellos años entre muchas de las posiciones obreristas y de izquierdas.

No hay aquí espacio para un análisis en detalle, pero algunos datos pueden reflejar estos cambios. Por ejemplo, en 1970 en la RFA, el 80 % de los obreros eran cualificados o semicualificados. En Italia ese porcentaje era del 70 %, mientras que en países como España esa cifra era tan solo del 28 %. Esta diferencia regional sobre las clases trabajadoras españolas y las alemanas, se reproducía, por ejemplo, en el caso germano atendiendo al patrón de género, ya que entre las mujeres el 12 % poseían cualificación frente al 54 % que no la tenían.¹⁵ Y esta división se veía también en el caso británico, entre los obreros negros e irlandeses y los nativos británicos. Dejando de lado las condiciones de trabajo más concretas, en esencia, estos niveles de cualificación de la mano de obra empleada en los sectores centrales de la economía se tradujo en rápidos aumentos en las

¹² Gerold Ambrosius y William H. Hubbard, *op. cit.*, pp. 52-53.

¹³ *Ibidem*, pp. 54 y ss.

¹⁴ Derek H. Aldcroft, *op. cit.*, pp. 219 y ss.

¹⁵ Gerold Ambrosius y William H. Hubbard, *op. cit.*, pp. 86-87.

escalas salariales. Por dar solo dos ejemplos, en Reino Unido los salarios reales se triplicaron entre 1950 y 1980 y en Francia se sextuplicaron.¹⁶

En aquellos años se compuso un modelo de integración europeo, de crecimiento económico y de articulación institucional que constituye la Europa de nuestro presente. Si lo resumimos brevemente en términos políticos podríamos decir que el modelo de gobierno europeo se consolidó en torno a dos niveles institucionales en permanente tensión. El primero estaría compuesto por los nuevos acuerdos e instituciones europeas, que constituían de algún modo los órganos que regularían a futuro el modelo capitalista europeo. El segundo se refería a la construcción de los sistemas de bienestar, encargados de componer a escala nacional los acuerdos que permitían la gobernabilidad del proceso europeo sobre la base de la redistribución de una parte del producto derivado del crecimiento económico.

III

La combinación de ambos niveles —la dimensión institucional supraestatal europea y los Estados de bienestar— debía servir de garantía de estabilidad y continuidad de la reconstrucción europea. Ciertamente, no existe mucho consenso sobre el papel y peso específico de cada uno de estos ámbitos. Perry Anderson¹⁷ y algunos autores como Andrew Moravcsick¹⁸ han insistido en una línea que ha interpretado todo el proceso europeo sobre la base de elecciones vinculadas a la búsqueda de beneficio económico: una especie de funcionalismo economicista enfocado a una dinámica de pura extracción de beneficios como eje articulador del proceso. En cualquier caso, parece interesante —como hace Anderson—, complejizar esta postura. Si queremos entender la capacidad de estabilización e integración social que Europa tuvo desde su fundación, debemos escapar del relato sobre la simple consolidación de determinados desarrollos económicos. También es preciso superar algunas de las dicotomías que se repiten al interpretar la historia europea. Los tradicionales pares opuestos «derecha e izquierda» o «Estado y mercado» operan con un grado de eficacia muy bajo para comprender este modelo de gobierno.

Tampoco ideas un tanto teleológicas como las de la «construcción neoliberal de la Unión Europea» operan con el grado de fineza que necesitamos. Ninguna de ellas dan cuenta de lo que ha significado Europa como «laboratorio del liberalismo contemporáneo».¹⁹ Más amplio y —si se quiere— impreciso, este último concepto deja más opciones a la hora de entender cómo en el modelo europeo —en distintas proporciones y fases— se han cruzado y mezclado apuestas keynesianas, neoliberales clásicas, monetaristas y ordoliberales. Y sin

¹⁶ *Ibidem*, pp. 88-89.

¹⁷ Perry Anderson, *El nuevo Viejo Mundo*, Madrid, Akal, 2012, pp. 104 y ss.

¹⁸ Andrew Moravcsick, *The Choice for Europe Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht*, Londres, Routledge, 1998.

¹⁹ Perry Anderson, *op. cit.*, p. 145.

embargo, todas ellas con un elemento singular que sirve de denominador común: los Estados del bienestar y sus sistemas de redistribución dirigidos a la producción y reproducción de las sociedades de clases medias.

El papel de los Estados como agentes estabilizadores es el elemento más singular del capitalismo europeo. Así lo destaca Perry Anderson a partir de dos autores, Barry Eichengreen²⁰ y Alan S. Milward.²¹ En el caso de Eichengreen estaríamos ante la descripción de lo que él denomina un «modelo de capitalismo coordinado» (planificado), mientras que para Milward el centro del proceso lo ocuparían los «Estados nación» como figura de redistribución y control político que marca el paso de la construcción europea. En cualquier caso, nos encontramos ante un proceso de planificación económica relativamente centralizada que promueve la expansión industrial y agrícola, el comercio exportador, la construcción de viviendas y la planificación urbana. La cuestión es, ¿qué tiene que ver todo esto con los modelos liberales o neoliberales descritos en una buena parte de las interpretaciones sobre Europa?

El nuevo Estado de posguerra fue reconstruido —según Milward— «sobre la base de un consenso político mucho más amplio que el que había configurado la política en el periodo de entreguerras. A este consenso se incorporaron tres grandes categorías de votantes que se solapaban y cuyas demandas al gobierno central habían sido hasta entonces imperfectamente satisfechas o incluso rechazadas: los trabajadores, los productores agrícolas y una difusa alianza de beneficiarios de rentas bajas y medias del Estado del bienestar».²²

Así, cuando el 25 de marzo de 1957 se firmó el Tratado de Roma, acta fundacional de la Comunidad Económica Europea, se selló la doble realidad de la construcción europea. Se reprodujo —por un lado— la separación institucional más jerárquica y distante creada para la CECA, donde aparecía un Alto Comisionado con un gran poder ejecutivo y con cierta capacidad autónoma y de subordinación de los Estados. Igualmente se creó también todo un conjunto de organismos supraestatales: la Comisión Europea, el Consejo Europeo, la Asamblea, el Tribunal de Justicia, el Comité Económico y Social y —en otro tratado— la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Todas estas instituciones servirían de superestructura reguladora de la nueva comunidad compuesta por Alemania occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. El libre comercio de mercancías y servicios, la política agraria común y el horizonte de mayores cotas de integración política quedaron allí recogidos.

Además de la creación de un nuevo mercado, se trató así de establecer instituciones que, con menor control democrático y alejadas de los conflictos estatales, pudiesen erigirse como órganos reguladores supranacionales frente a unos Estados que todavía contaban con un enorme margen de maniobra

²⁰ Barry Eichengreen, *The european economy since 1945. Coordinated capitalism and beyond*, Oxford, Princeton, 2008.

²¹ Alan S. Milward, *The european rescue of the nation-state*, Londres, Routledge, 2000.

²² *Ibíd.*, p. 27.

en sus territorios. Por esta razón, las relaciones entre ambos niveles («Europa» y los Estados) han estado siempre mediadas por intensas negociaciones que tienen que ver con el papel que juegan los Estados en tanto reguladores de las economías estatales y como garantes de su estabilidad y gobernabilidad en sus escalas nacionales. Este difícil equilibrio, fundacional del proceso europeo, se resumió siempre en la tensión entre reforzar el mando europeo como modelo regulador general o afianzar los equilibrios de gobierno en cada Estado miembro.

IV

La lenta planificación de los acuerdos institucionales no pudo caminar de espaldas a las contradicciones que se estaban despertando en el conjunto del continente. La más significativa de estas contradicciones fue la reaparición de la conflictividad obrera.

Pasada la guerra mundial, tanto los procesos de lucha anticolonial como las transformaciones sociales ocurridas en los países europeos tuvieron como telón de fondo la lucha por la autonomía política y por el reparto de los beneficios aflorados durante las décadas de 1950 y 1960. Los jóvenes emigrantes que aterrizaron en las grandes ciudades industriales se rebelaron contra la idea de que ese crecimiento económico fuese a costa de su salud, unos salarios moderados, unas relaciones sociales racistas y unas malas condiciones de vida. En todos los países europeos, este proceso se concretó en sucesivos ciclos de conflictividad que atacaron eficazmente el tejido productivo reconstruido tras la guerra. Los procesos masivos de emigración desde el sur de Europa hacia los países centrales y del norte, las migraciones interiores y exteriores junto a la escasa organización obrera en los primeros años sesenta promovieron —por contradictorio que parezca— protestas cada vez más difíciles de asimilar.

Así, por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña había más de 1.900 organizaciones empresariales y 700 sindicatos de trabajadores distintos, de los cuales apenas 186 estaban afiliados al TUC (Trade Union Congress). Con comunidades obreras recién migradas y asentadas en las ciudades, apenas sometidas a los sistemas sindicales de organización y con la multiplicación de formas sindicales de base, sin controles externos, el modelo de conflictividad en la Europa de finales de los años cincuenta y hasta primeros años de la década de 1970 fue un continuo *crescendo* de radicalidad. Añadido a las serias dificultades de gobernabilidad de las relaciones industriales, los largos ciclos huelguísticos presionaron al alza los salarios.

Tal y como relata Beverly Silver, los dos picos de conflictividad laboral más importantes fueron el que se produjo entre 1948 y los primeros años de la década de los cincuenta y el que va desde finales de los años sesenta hasta principios de los setenta.²³ Esta onda larga de conflictividad se extendió tanto en los países europeos como en los países del Sur global.

²³ Beverly Silver, *Fuerzas de trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1870*, Madrid, Akal, 2005, pp. 145-147.

Respecto al primer pico, en el caso europeo hubo cierto control del conflicto, a partir de mediados de la década de 1950, gracias a la creación de nuevos mecanismos de concertación social sostenidos por legislaciones de relaciones laborales cada vez más garantistas.²⁴ A través de un modelo de concertación donde gobiernos, patronales y sindicatos acordaban las subidas salariales se intentó contener la expansión de movimientos huelguísticos difíciles de prever. En una Europa casi de nueva creación y de gran movilidad y diversidad poblacional esto no hizo sino reforzar el papel de los Estados como agentes de concertación económica y redistribución. La nueva conflictividad obrera rompió, en cierto modo, las líneas de redistribución social establecidas en posguerra. Empujado por un nuevo tipo de militancia obrera recién emigrada y más joven, el nuevo ciclo de conflictos se alargó hasta casi llegados los años ochenta, especialmente en algunos países como Italia.

Esta segunda ola de conflictividad laboral coincidió con los denominados mayos del 68 y el auge de movimientos obreros más radicalizados. Los datos muestran el crecimiento de la conflictividad. Así, por ejemplo, en Alemania occidental el aumento de la conflictividad obrera entre 1968 y 1973, con respecto del periodo 1958-1967, fue de un 223 %, algo que se repitió en otros países como Bélgica con un crecimiento del 191 %, Francia con un 146 %, Italia con un 115 % y Reino Unido con un 242 %. En el caso español se concretó en que de las 1.785.462 horas perdidas por huelgas en 1966 se pasó a las 110.016.000 diez años después.²⁵ La consecuencia más evidente de este ciclo de luchas obreras fue el notable aumento de los salarios nominales. Así entre 1966 y 1968 el salario nominal en Francia creció un 5,8 %, mientras que entre 1969 y 1970 lo hizo un 11 %. En Italia pasó en esos mismos años del 6,9 % al 11,3 % y en Alemania del 5,6 % al 12 %.²⁶ La pregunta es cómo fue posible que los movimientos huelguísticos y las luchas obreras desbordasen los mecanismos de concertación laboral, especialmente diseñados para controlar los salarios. Este interrogante se explica en buena medida por el cambio de militancia obrera que se produjo en aquellos años, así como la diversificación de sus luchas.

De hecho, en 1970 se produjo un fenómeno curioso, los lugares donde mayor diversidad obrera existía, ya fuese porque persistieran las migraciones del campo a la ciudad o porque llegaran nuevos migrantes extraeuropeos (de las excolonias), como fue el caso de Italia, Francia, Gran Bretaña y Alemania, también fueron los países donde se registra mayor conflictividad. Pero no solo eso, en esos países se demostró que la afiliación sindical era inversamente proporcional al volumen de la conflictividad. Esto es, a mayores niveles de sindicación, menores tasas de conflictividad. Los datos de afiliación sindical

²⁴ Ray Marshall, F. Briggs, M. Vernon y Allan G. King, *Economía laboral. Salarios, empleo, sindicalismo y política laboral*, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1987, pp. 194 y ss.

²⁵ En P. Dubois, «Nuevas modalidades de conflicto laboral» en C. Crouch y A. Pizzorno, (comp.), *El resurgimiento del conflicto de clases en Europa occidental a partir de 1968*. (2 vols.), Madrid, MTSS, 1991, p. 29.

²⁶ Barry Eichengreen, *op. cit.*, p. 217.

en los cuatro países que hemos citado eran los siguientes: un 49 % en Gran Bretaña, un 33 % en Alemania, un 38 % en Italia y un 21 % en Francia. Cifras muy alejadas de los datos de Austria y otros países del norte, con mayores cotas de concertación social y donde se superaban tasas de afiliación del 60 % e incluso el 70 %.²⁷

El aumento de la conflictividad protagonizada por las clases trabajadoras fue el principal factor crítico de la Europa de los años sesenta. Compuesta fundamentalmente por migrantes e hijos de emigrantes de las zonas rurales y de las antiguas colonias europeas, esta nueva amalgama social protagonizó la ruptura de los sistemas de negociación colectiva, sindicalización y moderación salarial. Con ellos el sindicalismo de concertación y los partidos de izquierda sufrieron sus primeras fracturas, multiplicando el número de siglas, organizaciones y colectivos. Si a esto sumamos además las revueltas anticoloniales, la independencia de las colonias y los primeros movimientos feministas entendemos cómo la conflictividad social cambió por completo el panorama en los albores de la crisis de finales de los años sesenta.

Acerca de esta cuestión se han abierto distintas interpretaciones que podríamos resumir en dos posturas enfrentadas. De un lado, están quienes ponen en el centro de esta crisis la vinculación existente entre la lucha de clases y la ingobernabilidad del ciclo industrial fordista europeo. Esta es la opinión de autores como Barry Eichengreen, la escuela regulacionista o los autónomos italianos. Mientras que la otra posición busca las causas de la crisis en una escala aún mayor: desde la década de 1960 el capitalismo se habría encontrado ante una irresoluble crisis de sobreproducción y por lo tanto de competencias intercapitalistas en la que Europa parecía condenada a perder, al menos a largo plazo. Esta última tesis, defendida especialmente por Robert Brenner,²⁸ ofrece una explicación radicalmente distinta de la crisis de los años setenta. Brenner sitúa sus raíces de manera temprana en las caídas de las tasas de beneficio en Estados Unidos en el periodo 1965-1973 y pone más el acento en la competencia intercapitalista y no en la subida de la presión salarial a la hora de interpretar lo sucedido.

El diagnóstico de ambas líneas de interpretación es sin embargo similar. Entre 1965 y 1973 los sistemas de planificación y reparto económicos diseñados en la Europa de posguerra se tambaleaban. Por su parte, las élites europeas entendieron que la maquinaria de redistribución económica había entrado en crisis por la falta de competitividad, al tiempo que los mecanismos de concertación estatales eran quebrados por la nueva conflictividad obrera. La disyuntiva entonces parecía clara. O bien se continuaba por el camino de la concertación ante movimientos de lucha cada vez más poderosos. O bien se optaba por la vía de desmontar el andamiaje de los Estados del bienestar de posguerra, expulsando abiertamente a amplias fracciones de la sociedad de

²⁷ Michael Mann, «Orígenes de la diversidad de los movimientos de la clase obrera en la Europa del siglo XX», *New Left Review*, núm. 20, mayo-junio de 2003, p. 55.

²⁸ Robert Brenner, *La economía de la turbulencia global*, Madrid, Akal, 2009.

sus sistemas de reparto. Esta segunda opción fue la defendida por la contrarrevolución neoliberal.

V

Tras la bancarrota de las propuestas keynesianas, la crisis de los años setenta permitió el ascenso de un paradigma económico radicalmente distinto. En medio de la confusión y el vacío ideológico, hizo su entrada el monetarismo y un nuevo conservadurismo, ambos encarnados de forma paradigmática en la figura de Margaret Thatcher. Aquella líder tory —personaje crucial en la historia contemporánea europea— asumió el increíble reto de quebrar los consensos de posguerra. Primero como parlamentaria, luego ministra y finalmente primera ministra entre 1979 y 1990, Thatcher vivió la evolución política europea de posguerra en todas sus fases. Defensora de los castigos físicos en las escuelas y contra los jóvenes rebeldes, campeona intransigente de la familia tradicional y enemiga de los sindicatos, perteneció a la generación conservadora que vivió como una humillación el creciente poder obrero y de los sindicatos ingleses.

Ya en la década de 1970, y luego a lo largo de sus sucesivos gobiernos en la década de 1980, Thatcher se dio como «principal misión» diseñar su propia «contrarrevolución conservadora». Su particular fórmula se componía de dos ingredientes.²⁹ El primero estaba en el impulso de las tesis monetaristas, convertidas en nueva ortodoxia económica. Thatcher asumió que las reglas del mercado debían regir la economía del Reino Unido, reduciendo drásticamente la intervención estatal. La privatización de los sectores públicos, la destrucción del poder sindical y el adelgazamiento de las estructuras del Estado, empezando por el número de funcionarios, fueron algunas de sus consecuencias más visibles.

El segundo ingrediente estaba en la reformulación de las políticas conservadoras como ariete contra el sentido común de los gobiernos anteriores, incluido el del primer ministro conservador Edward Heath (1970-1974). De esta misión se encargaron diversos think tanks como la Mont Pelerin Society o el Institute of Economic Affairs de Londres, por citar solo dos de los más influyentes. No obstante, sería en el Centre for Policy Studies (CPS), fundado en 1974, donde Margaret Thatcher y su correligionario Keith Joseph concretarían la mayor parte de su programa. Así se puede ver en uno de sus principales textos de reflexión, titulado *Monetarism is not enough*.³⁰

Las tesis del CPS y del thatcherismo forzaron al partido conservador a abandonar el consenso de posguerra. Ahora se trataba de construir un nuevo espacio político y una nueva fuerza social: la denominada «nación

²⁹ David Harvey, *Breve historia del neoliberalismo*, Madrid, Akal, 2007, pp. 28 y ss.

³⁰ Keith Joseph, *Monetarism is not enough*, Londres, CPS, 1976 (disponible on line). Se trata de un texto elaborado a partir de las conferencias ofrecidas por el autor en distintos círculos conservadores británicos.

conservadora». Este cambio se produjo tras una larga década de debates y enfrentamientos dentro del partido. El primer episodio de esta batalla se produjo en 1968, cuando el diputado Enoch Powell hizo público su famoso discurso «Ríos de sangre»³¹ donde atacaba frontalmente la Race Relations Act, una ley que abogaba por la convivencia interracial. En este discurso Powell criminalizó explícitamente a los inmigrantes, al tiempo que hacía un llamamiento a su deportación. Powell fue expulsado de las filas tories, pero recibió el significativo apoyo de la joven parlamentaria Margaret Thatcher. Semanas después, se publicaron distintas encuestas que corroboraban que en Gran Bretaña existía una importante capa de la población explícitamente racista y que apostaba por este tipo de políticas migratorias de mano dura y deportaciones masivas.

En los años siguientes, el papel de Thatcher pasó por convertir aquella «mayoría silenciosa» oculta tras las encuestas, que ya no apostaban por la integración como su principal sustento político, con el fin de dotarla de una expresión electoral y de gobierno. Todo ello con un objetivo añadido, llevar la cuestión racial más allá, para convertirla en una causa general contra las capas populares.

«La economía es el método, el objetivo es cambiar el alma» dijo Thatcher. Y el reto era enorme, obligaba a ofrecer una explicación alternativa a lo sucedido en tres décadas de política británica. Según su análisis, la planificación económica y la construcción de sistemas de bienestar habían apostado por un modelo de integración social y pleno empleo insostenibles. Contra esta máxima keynesiana, la tesis principal de los neoconservadores fue en la dirección opuesta. Para ellos, esta ecuación social había hecho que la lucha de clases fuese interiorizada dentro del Estado, de tal modo que ahora los sindicatos controlaban los aumentos salariales y la redistribución de rentas. Se había establecido así una sociedad corporativista, en la que las entidades sindicales lograban prebendas que trastocaban las jerarquías de clase y —por ende— las relaciones de autoridad y poder. A su criterio, el Estado había quedado preso de las necesidades financieras de estos sectores, lo que le obligaba a un constante aumento de la presión impositiva sobre el sector privado y —más tarde— al endeudamiento permanente. De manera automática, la espiral inflacionista subordinaba toda la economía privada a financiar estas prebendas de los sindicatos: la redistribución de rentas, los aumentos salariales y un sector económico y de servicios públicos deficitarios. La economía del bienestar subsidiada había provocado además cambios sustanciales en las formas de vida del país, generando expectativas que atraían la inmigración masiva y formas de vida liberadas del trabajo gracias a los subsidios.

Ante este panorama, que no dudaban en juzgar escandaloso, la principal tarea de los conservadores pasaba por deshacer las bases de esta estructura que otorgaba tanto poder a los sindicatos y a las luchas obreras, a los movimientos contraculturales y a las feministas. Pero también, se trataba de revertir

³¹ Enoch Powell, «Ríos de sangre», disponible *on line* bajo el título original *Rivers of Blood*.

los mecanismos que habían abierto las puertas a una sociedad de trabajadores migrantes venidos desde todos los confines de la Commonwealth, especialmente del Caribe, Pakistán o India y que formaban una capa de la sociedad que debía ser disciplinada, controlada y —en su caso— expulsada. A favor de este nuevo programa, cargado de tanta radicalidad, jugaba la crisis capitalista. Sin crecimiento económico y beneficio industrial, el sistema de reparto diseñado tras la Segunda Guerra Mundial no podía prosperar, tampoco su sistema institucional. En estas condiciones, anular el reparto y su consecuente coste social apareció como la única solución posible ante el electorado de clase media británica.

En este punto es donde Thatcher hizo valer las aportaciones intelectuales de Friedrich Hayek. El pensador austriaco, que dedicó buena parte de sus estudios al caso británico, resultó ser un apoyo determinante —al igual que toda la Escuela de Chicago— al proyecto neoconservador. La tesis de Hayek del denominado «orden social espontáneo»³² donde las relaciones entre individuos se establecían sin mediación del Estado, al igual que su defensa de las instituciones tradicionales orgánicas construidas sin necesidad de la mediación estatal, encontró en los nuevos tories un encaje de consecuencias incalculables. Estas tesis permitieron a Thatcher añadir un consistente tono moral a su propuesta económica.³³

De acuerdo con estos preceptos, la puesta en marcha de las reglas de libre intercambio económico provocarían la liberación de todas las potencias individuales. Para Thatcher, al igual que para Hayek, solo los individuos beneficiados por las lógicas corporativas del reparto estatal podían oponerse a la libre iniciativa. Solo aquellos que se negaban a quedar sometidos al mandato del esfuerzo y el trabajo, acostumbrados a vivir subsidiados, quedaban al margen de esta nueva razón política. Dentro de esta espiral de sospecha, los parados o los marginados fueron acusados de pretender vivir a costa de los subsidios o directamente de la delincuencia. Thatcher se propuso cortar en seco este deseo de «vivir sin trabajar» y de «depender del Estado». La construcción del enemigo interior constituyó la particular forma de gobierno de los nuevos conservadores. Y este enemigo se podía extender por doquier según la misma lógica: los mineros en huelga, las madres jóvenes que necesitaban subsidios o los jóvenes negros. Todos ellos fueron objeto de políticas disciplinarias clasistas, machistas y abiertamente racistas.

A la luz de la historia, Thatcher salió victoriosa. Su propuesta produjo lo que algunos autores han denominado un «cierre cognitivo»³⁴ en el que parecería imposible aplicar otro tipo de políticas económicas que no pasasen por la fórmula neoliberal. Su batalla por la moralización social contra los excluidos del sistema y las clases trabajadoras en crisis arrinconó a todos estos

³² Friedrich Hayek, *Los fundamentos de la libertad*, Barcelona, Alianza, 2022.

³³ Wendy Brown, *En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente*, Madrid, Traficantes de Sueños/Tinta Limón, 2021, pp. 102-111.

³⁴ Michael Blyth, *Great Transformations. Economic Ideas and institutional change in the twentieth century*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

sectores bajo apelativos como gorriones, vagos, indisciplinados y aprovechados. En diferentes campañas públicas, políticas y mediáticas, se generaron igualmente una serie de «pánicos morales» que asociaban sistemáticamente a estos sectores sociales y sus subculturas o formas de vida —especialmente a la población joven obrera y negra— con la criminalidad.³⁵

Naturalmente las políticas de Thatcher generaron fuertes movimientos de protesta. El racismo inscrito en sus medidas desató la explosión de muchos barrios periféricos ingleses, dando curso a una serie de disturbios que tuvieron su climax en Brixton en 1981. Pero la gran batalla pública del thatcherismo se nucleó en los años 1984 y 1985 alrededor de la conocida huelga de los mineros. En este conflicto, que se saldó con una contundente victoria de Margaret Thatcher, se aplicaron todos los métodos represivos y de contrainsurgencia imaginables. Comparable a la persecución contra el Partido de los Panteras Negras por parte de la COINTELPRO (Counter Intelligence Program), la huelga de los mineros fue un enfrentamiento minuciosamente preparado por Thatcher y su equipo de gobierno, en especial Keith Joseph y Nigel Lawson, secretario de Estado de Energía entre 1981 y 1983.

Tal y como explica en su autobiografía, *La Dama de Hierro*, los conservadores habían quedado seriamente traumatizados por la derrota del gobierno conservador de Edward Heath en la huelga minera de 1972. Sobre las enseñanzas de esta experiencia, la contienda de 1984 —un conflicto que Thatcher consideraba ineludible— se preparó con años de antelación, incrementando las reservas nacionales de carbón para amortiguar lo que se aventuraba como un conflicto de largo recorrido. Al final, Thatcher logró su propósito e impuso la reconversión definitiva del sector minero inglés. Por su parte, el sindicato de mineros NUM tuvo que encajar una derrota histórica, tras una lucha casi heroica que llevó a sus líderes, especialmente su principal dirigente Arthur Scargill, a ser perseguido judicialmente hasta bien entrados los años noventa.

Menos conocidas, pero no menos duras, fueron las medidas contra la inmigración que aplicó Thatcher a medida que se fueron aplacando los disturbios antirracistas. En 1980 aprobó la Social Security Act que autorizaba redadas en los centros de trabajo y excluía a los migrantes indocumentados de las prestaciones sociales y médicas. En 1981, la British Nationality Act dificultaba la nacionalización de hijos de extranjeros nacidos en Reino Unido. En 1987, la Carriers Liability Act impuso multas a las aerolíneas que transportaran personas sin todos sus papeles en regla. Y finalmente en 1988, la Immigration Act retiró algunos beneficios a los migrantes de las antiguas colonias de Gran Bretaña.³⁶

En conjunto, el thatcherismo demostró tener un programa sólido en todos los frentes y logró dar la vuelta a muchos de los consensos de posguerra.

³⁵ VV. AA, *Gobernar la crisis. Los atracos, el Estado y «la ley y el orden»*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2024, pp. 515 y ss.

³⁶ Elisa Ortega Velázquez, «La consolidación histórica de la migración irregular en Europa: leyes y políticas migratorias defectuosas», en *Anuario mexicano de derecho internacional*, diciembre 2014, disponible on line.

Su capacidad para movilizar a distintos sectores de clase media contra otros sectores de menor renta favoreció sus objetivos, y estableció una férrea división clasista de la sociedad. Pero sin duda, su mayor logro lo describió ella misma en 2002, cuando dijo que la aparición de «Tony Blair y el nuevo laborismo» eran su mejor legado político. Con ello constataba que durante sus años de gobierno (1979-1990) y los de Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989), el mundo había cambiado definitivamente. Pero ¿qué supuso el thatcherismo para el resto de Europa? La liberalización de la economía por medio de la deslocalización y reconversión de los tejidos industriales, la privatización de servicios públicos y el desmantelamiento de parte de las empresas públicas marcaron el camino a ambos lados del Canal de La Mancha. Junto a ello, la desregulación de los sistemas financieros y la apertura de nuevas fórmulas de inversión financiera cumplieron el mandato del llamado nuevo Consenso de Washington (1989). Pero la historia del continente es más compleja: dentro del proceso de integración europea se acumularon y solaparon capa a capa los viejos estratos que sostenían en buena medida sus Estados del bienestar y los mecanismos monetarios de sostenimiento de la riqueza y de los tejidos productivos. La contrarrevolución en el continente adoptó la modalidad de una reforma continua.

VI

De vuelta al continente, se puede decir que en Europa occidental la nueva hegemonía neoliberal abrió su propio camino, muy distinto al británico. A modo de anécdota, esta distancia se encarnó en el enfrentamiento que mantuvieron en aquellos años Helmut Kohl y Margaret Thatcher a propósito de la reunificación alemana. Por su parte, Thatcher ya había ensayado una política de tensión con Bruselas, que tuvo uno de sus episodios más importantes en la aprobación del llamado «cheque británico» (1984), una rebaja de entre 3.500 y 4.500 millones de euros anuales en las aportaciones que correspondían a Gran Bretaña para financiar a la entonces CEE. Formalmente, esto tenía que ver con la escasa producción agraria británica, dado que la PAC consumía buena parte del presupuesto europeo. Pero en realidad, Thatcher buscaba una acción ejemplificadora y de prestigio contra los sistemas de solidaridad fiscal europeos que parecían no perder vigencia. En cierto modo, el «Referendum del BREXIT» (2016), se puede explicar a partir del experimento neoliberal thatcheriano.

A la altura de 1986, el proceso político de la Europa continental no encajaba de ningún modo con la experiencia de la Gran Bretaña thatcherista. La Europa de la década de 1980 no pasó por un proceso de «modernización reaccionaria», ni tampoco por una réplica del «populismo autoritario» thatcheriano,³⁷ según la denominación de Stuart Hall.³⁸ Antes bien, los gobiernos

³⁷ Para ver una panorámica sobre la idea de «populismo autoritario» se puede consultar Andrew Gamble, *The Free Economy and the Strong State. The Politics of Thatcherism*, Londres, McMillan Press Ltd., 1993, pp. 179 y ss.

³⁸ Stuart Hall, *El largo camino de la renovación. El thatcherismo y las crisis de la izquierda*, Madrid, Lengua de Trapo, 2018.

continentales no dejaron de apostar —al menos formalmente— por sociedades cada vez más liberales de consumo, pero siguieron dirigiendo su economía al gasto público como garantía de integración y estabilidad social. En este modelo participaron tanto gobiernos socialdemócratas como los de Francia y España, como gobiernos demócrata cristianos como los de Alemania o Italia.

Como señala Perry Anderson, en aquellos años faltó sin embargo una auténtica teoría de «la economía política de la integración» como la que Milward ofreció para los años cincuenta. Esta posible explicación, que Anderson encuentra en la Escuela de Ámsterdam³⁹ —un conjunto de estudiosos que han tratado de interpretar los dos procesos que se dieron en paralelo en los años ochenta y primeros noventa— entraría en contradicción con no pocos postulados acerca de la construcción neoliberal europea. Sencillamente, las políticas que van de 1980 a 2008 incorporaron (y en parte amortiguaron) este giro neoliberal global, a la vez que construían un potente «metabolismo económico de integración», una suerte de Estado del bienestar neoliberal. Al contrario de lo que sucedió en Gran Bretaña, aquí los viejos factores de la Europa de posguerra: integración europea, Estados del bienestar y clases medias perduraron con mayor intensidad.

Este tipo de política se puede observar en la política de ampliación de la Comunidad Económica Europea hacia los países del sur del continente. Grecia (1981), Portugal y España (1985) se encontraron nada más aterrizar con la doble dimensión de la convergencia Europea en un marco neoliberal *sui generis*. Por un lado, en los años siguientes se aprobaron los principales tratados de liberalización de servicios, mercancías y capitales. La construcción del denominado Mercado Único se concretó en la firma del Acta Única de 1986, ejemplo de traslación formal de los postulados neoliberales al tejido económico europeo. Y luego con la firma del Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea (1992), donde se fijaron las reglas del juego fiscal para los Estados y se abrió el camino a la unión monetaria. En aquel acuerdo quedaron establecidos los límites al déficit presupuestario en el 3 %, el endeudamiento público en el 60 % del PIB y la inflación en el entorno 2-3 %. Esta fase de largo recorrido tendría sus últimos episodios en la aparición de la moneda común (2002), la firma del Tratado de Ámsterdam (1997) y el Tratado de Lisboa (2007), que cerraron el proyecto de mercado único en torno a la libre circulación de capitales, personas, mercancías y servicios. Sin embargo, la construcción del mercado único siguió una lógica de inversión y reequilibrio territorial que merece una explicación propia. El proceso de integración europeo dispuso desde sus inicios distintos mecanismos de inversión dirigidos a equilibrar unos países con otros y satisfacer de algún modo las demandas nacionales de estabilidad social.

Desde sus orígenes, el proyecto europeo se dotó de este tipo de mecanismos respaldados por los Estados con el fin de apoyar —por ejemplo— la creación de empleo. A este propósito se crearon el Fondo Social Europeo

³⁹ Perry Anderson, *op. cit.*, pp. 143-144.

(1957-58) y el Banco Europeo de Inversiones (1958). Este modelo de inversión y financiación pública estaban dirigidos a fortalecer el tejido económico. La crisis de los años setenta y la ampliación a nuevos países, lejos de hacer decaer esta lógica, la impulsó con más fuerza. Los llamados Fondos Estructurales se fueron reproduciendo en distintos programas a lo largo de las décadas. Primero dirigidos a las políticas agrarias, con el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA-Orientación) de 1971, y más tarde enfocados al desarrollo regional con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) en 1975. Estas dos estructuras se sumaron al Fondo Social Europeo y al Banco Europeo de Inversiones como herramientas de integración tanto económica como social. Después de estos llegaron los Fondos de Cohesión (1992), que se impulsaron junto a los Tratados de Maastrich y Ámsterdam hasta llegar a la década de los 2000.⁴⁰

Así, solo entre 1993 y 1999, estos Fondos Estructurales y de Cohesión inyectaron 530.000 millones de euros⁴¹ dirigidos a inversiones en infraestructuras, creación de nuevos servicios y apoyo a la inversión industrial. Se convirtieron, por lo tanto, en uno de los motores de cohesión del conjunto de Europa. *A priori*, este tipo de intervenciones se alejaban de la lógica neoliberal. La mínima intervención del Estado en la economía parecía no cumplirse. Pero la realidad era que sin esos soportes los distintos desequilibrios territoriales y productivos europeos hubieran imposibilitado el propio proceso de integración europeo y sus lógicas de libre circulación de servicios, mercancías, personas y capitales.⁴² Sencillamente, la falta de competitividad de los tejidos productivos europeos se estaba supliendo con políticas monetarias comunes.

Agricultura, pesca, ganadería, industria, infraestructuras. Durante décadas, todos los sectores han recibido enormes apoyos públicos que les han ayudado a salir a flote y mantener su competitividad. Todo ello gracias a distintos programas que se han mantenido de manera sumatoria hasta hoy en día y que en el inicio del siglo XXI tomaron el nombre de «Agenda 2020». Por solo considerar los principales programas, entre 1957 y 2022, Europa ha puesto en marcha el Fondo Social Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, los Fondos Estructurales, los Fondos de Cohesión, los Fondos Preadhesión, la Agenda 2020, los programas vinculados a la expansión cuantitativa y los Fondos Next Generation EU. Esta suerte de keynesianismo nada tiene que ver con el libre mercado puro. Entonces, ¿qué clase de neoliberalismo se construyó en aquellos años?

⁴⁰ Lydia Sánchez de Gómez, «Evolución histórica de la cohesión económica y social en la Unión Europea», *Revista de Estudios Empresariales*, núm. 2, 2011, pp. 4-28.

⁴¹ María Dolores Correa y Juan Manzanedo López, «Política regional española y europea 1983-1999», *SGFCC*, núm. 5, 2002.

⁴² Así lo determinó en 1973 el denominado «Informe Thompson» encargado por la Comisión Europea y que hacía referencia a las diferencias regionales que existían en Europa como uno de los obstáculos clave para la futura integración monetaria y comercial.

Como señala Susan Watkins, el Tratado de Maastricht de 1991 heredero del Plan Delors⁴³ fue el primer gran momento en el proceso de consolidación neoliberal. Recordemos que de allí salieron los primeros ensayos de control y disciplina fiscal dirigidos por Alemania y el Bundesbank para toda Europa, así como el denominado Plan de Estabilidad y Crecimiento de 1998. Pero todavía —y aquí está la clave— dejó fuera de sus dominios muchos ámbitos de gobierno para los Estados. Los impuestos, los sistemas de pensiones, los subsidios de desempleo, la sanidad, la educación y el gasto social quedaron aún en manos de los gobiernos nacionales que conservarían un alto margen de maniobra y negociación dentro de sus respectivos marcos estatales.⁴⁴

Se mantuvo así un doble proceso de sostenimiento público: de un lado, los Estados del bienestar y del otro los distintos programas de inversión europeos. Ambos convivieron con el proceso de liberalizaciones de servicios y mercancías por el que apostó la Unión Europea en sucesivas rondas. Las décadas de 1980 y 1990 fueron testigo de la primera oleada de privatizaciones y liberalizaciones sectoriales, mientras que en los años 2000 este proceso se consolidó con la conocida como Directiva Bolkestein (2006) y, de manera más sistemática, con el Tratado de Lisboa (2007).⁴⁵ De este modo, los ferrocarriles, los servicios sanitarios, la educación, el transporte aéreo, el agua, la energía y las comunicaciones, todos los servicios estratégicos que en otro tiempo estuvieron vinculados a las economías públicas entraron en este proceso de privatización-liberalización.⁴⁶

Aunque *a priori* resulte contradictorio, los procesos de liberalización y privatización de servicios fueron aplicados por gobiernos de todo signo: socialdemócratas, demócratacristianos, liberales y conservadores. Y en todos los casos quedaron en pie —si bien atravesados por el sector privado— una parte importante de los servicios públicos de salud, educación y asistencia social, así como multitud de empresas estratégicas aún participadas, tuteladas o protegidas por el Estado en sectores como los transportes, las comunicaciones o la energía. En cierta medida, esto significaba que los pilares del Estado del bienestar —aunque atacados— aún estaban bajo la sombra de los viejos sistemas de concertación y dentro de la lógica político-electoral de la vieja Europa de posguerra. Sujetos así a las contiendas sociales y políticas nacionales donde sindicatos, partidos políticos, ciertos grupos sociales, al igual que la movilización social, conservaban cierta capacidad de acción.

⁴³ Plan presentado en 1989 por el entonces Presidente de la Comisión Europea Jacques Delors.

⁴⁴ Susan Watkins, «La triple torsión de Europa», *New Left Review*, núm. 90 (edición española), enero-febrero de 2015, p. 13.

⁴⁵ Observatorio Metropolitano, *Crisis y revolución en Europa*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2011, p. 65.

⁴⁶ CGT, «Directiva Bolkestein», *Boletín CGT*, núm. 101, 2005, disponible on line.

VII

De un modo un tanto contradictorio, la economía global vista desde de la Europa de los 15 y luego de los 25 se construyó como un enorme aparato de integración política. La cuestión está en saber cómo fue posible generar estos mecanismos de integración fuera ya del marco del desarrollo económico keynesiano característico de las décadas de 1950 y 1960. La respuesta está en los procesos de financiarización de la economía.

La financiarización implicó la negociación de enormes masas monetarias en unos mercados bursátiles explosivos. Esta liquidez era el resultado de los enormes beneficios industriales acumulados de las décadas pasadas, así como de los llamados petrodólares que resultaron de las alzas del petróleo de la década de 1970. A partir de los años ochenta, las empresas no financieras, los bancos, los Estados y los hogares entraron, de este modo, en un nuevo juego basado en la negociación de bonos, acciones y otros títulos de propiedad, así como en el recurso masivo al endeudamiento.⁴⁷ Si en 1980 el valor de los activos financieros globales tenía un volumen similar al valor del PIB mundial, en 1995 estos duplicaban ya el valor del PIB y en 2005 los superaban en 3,5 veces.⁴⁸ En 2007, el valor de los activos financieros era de casi 200 billones de dólares.

Gracias a la desregulación financiera, esta enorme masa de capital empezó también a inundar Europa. La posición privilegiada, que desde los años ochenta tuvo la City de Londres y —en segunda instancia— la bolsa de Fráncfurt, fueron la puerta de entrada para un nuevo sistema de obtención de rentas. Los flujos de liquidez permitieron también reflotar una economía que desde la crisis de los años ochenta no había logrado recuperarse.

En términos cuantitativos, la financiarización está detrás de la solución a la crisis industrial de la década de 1970. Del crecimiento del PIB casi nulo de los primeros años ochenta, con un 0,5 % anual en Alemania, un 1 % en España, un 1,7 % en Francia, un 0,5 % en Reino Unido o un 0,4 % en Holanda, se pasó a una posición de crecimiento pequeño pero sostenido a finales de la década. Así entre 1984 y 1990, Alemania, España, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Portugal o Gran Bretaña crecieron en torno al 2 o incluso al 3 %. De hecho, entre 1994 y 2003 la media del crecimiento de la Unión fue del 3,1 % anual, y solo Alemania e Italia quedaron por debajo, con un 2 % anual.⁴⁹

El modelo de crecimiento financiarizado implicaba una diferencia sustancial con respecto del modelo de crecimiento de los años cincuenta y sesenta. Si en aquellos momentos la reinversión de los beneficios empresariales

⁴⁷ Costas Lapavistas, *Beneficios sin producción. Cómo nos explotan las finanzas*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2016, pp. 22-23 y 394-395.

⁴⁸ François Chesnais, *Las deudas ilegítimas. Cuando los bancos meten mano en las políticas públicas*, Madrid, Clave intelectual, 2012, pp. 54-57.

⁴⁹ Enrique Palazuelos Manso, «Fases de crecimiento económico de los países de la Unión Europea», *Revista ICEI*, junio de 2005, p. 12.

conllevaría un crecimiento económico sostenido y la formación de capital, en la Europa de los primeros años 2000 se empezó a producir lo contrario. Entre 2000 y 2003 la media de crecimiento del excedente neto de explotación en Europa fue tan solo de un 0,1 %, con no pocos países en números negativos (Bélgica, Holanda, Italia, Portugal o Suecia) y con una ratio entre este excedente neto de explotación (beneficios) y el stock neto de capital (riqueza) de -2,4 %. Solo Alemania, Reino Unido y —con las trampas que ya conocemos— Grecia⁵⁰ escaparon con cierta solvencia a esta nueva lógica de crecimiento de la inversión financiera sin mayor productividad ni formación de capital.

No obstante, la financiarización resultó incapaz de recuperar la senda de los beneficios industriales y el aumento de la deuda se convirtió de hecho en el principal mecanismo de financiación del sector privado. Así, entre los años 1996 y 2007 la deuda del sector privado de Irlanda aumentó en un 25 % con respecto a su PIB, la de España y Portugal entre el 15 % y el 20 % y países como Holanda o Bélgica la vieron incrementada en más del 10 %.⁵¹ Esta ola de endeudamiento se reflejó también en los Estados que, a falta de políticas fiscales ambiciosas, aumentaron el gasto público contrayendo nuevas deudas. En 2007, Italia y Grecia contaban así con una deuda pública de más del 100 % respecto de su PIB, Portugal del 72,7 %.⁵² Estas cifras no eran todavía excesivamente elevadas, sobre todo en relación con lo que luego alcanzarían, pero tan solo dos años después marcarían la división entre los países ricos y los que caerían en una fuerte crisis económica.⁵³

Añadido a la liberalización de servicios y mercancías en un mercado único, el aumento de la deuda privada o el nuevo impulso de las políticas públicas por medio del endeudamiento, otro factor determinante fue la creación de la moneda común, el euro, que entró en circulación en 2002. Con la nueva divisa, apareció en escena la última gran institución del proceso de integración: el Banco Central Europeo (BCE). Es cierto que este organismo llevaba funcionando desde 1998, pero no se incorporó a la estructura de la Unión Europea hasta 2007 con el Tratado de Lisboa.

El BCE se parecía formalmente a la Reserva Federal Americana (FED), pero la similitud era solo aparente. El BCE no tenía capacidad para emitir

⁵⁰ Nos referimos a la manipulación de las cuentas griegas realizada con la connivencia de Goldman Sachs y Lukas Papademos, entonces gobernador del Banco Central Griego, posterior vicepresidente del Banco Central Europeo hasta 2008 y luego de esto primer ministro de Grecia en 2011.

⁵¹ VV.AA, *Fracturas y crisis en Europa*, Madrid, Clave intelectual, 2013, pp. 75-81.

⁵² Manuel Carlos Hernández Recio y Pedro Atienza Montero, «Evolución reciente de la deuda pública en los países de la Zona Euro. Determinantes y sostenibilidad de la misma», *Presupuesto y Gasto Público*, núm. 94, 2019.

⁵³ Recordemos que en estos años la Unión Europea se embarcó en su mayor ampliación desde su fundación, con la incorporación entre 2004 y 2007 de otros 12 países miembros (República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia) reforzando la idea de una Europa a varias velocidades pero con centro indiscutible en Alemania.

deuda pública común para financiar las políticas europeas, algo que lo dejaba sin margen de maniobra en caso de crisis. A diferencia de la FED americana, capaz de controlar no solo los tipos de interés sino de emitir deuda para estabilizar la economía estadounidense, el Banco Central Europeo fue creado con la misión casi exclusiva de controlar la inflación y la cantidad de dinero en circulación por medio de los tipos de interés.

Semejante configuración del nuevo sistema monetario posicionó al Bundesbank y al gobierno alemán como gerentes de Europa. No en vano, el euro no era más que una extensión del viejo marco alemán. Buena parte de la economía europea —sobre todo las exportaciones y retornos financieros— se pusieron así al servicio de la economía alemana. En efecto, los países centrales de la Unión Europea —encabezados por Alemania— tuvieron en aquellos años un saldo favorable por cuenta corriente⁵⁴ del 7,5 % (2007) y del 6,4 % (2012), mientras que los países del sur —incluida Francia— registraban saldos negativos.⁵⁵

Estos desequilibrios estallaron con la crisis financiera de 2008, cuando el conjunto del sistema internacional se derrumbó. La quiebra en septiembre del gigante financiero Lehman Brothers precipitó una crisis en la que uno tras otro fallaron todos los mecanismos de deuda. En un trepidante recorrido de impagos y quiebras, la deuda pública contraída por los países europeos, en esencia, el motor de las economías europeas, colapsó. El PIB de Alemania cayó un 5,5 % en 2009, el de Irlanda un 5 % y el de España, Portugal, Italia, Francia y Bélgica entre un 1,5 % y un 2 %. Las primas de riesgo se dispararon y las bolsas se desplomaron, mientras la inflación comenzaba a superar en muchos países el 4 % y los tipos de interés no dejaban de subir con cifras que llegaron al 5,4 %.

El primer indicador crítico estuvo en la deuda privada de los sectores no financieros (deuda de hogares y sociedades no financieras), que alcanzó niveles desorbitados con ratios sobre el PIB del 217,9 % en el caso de España en 2011, del 235,7 % en Bélgica, del 309,5 % en Irlanda o del 249,3 % en Portugal. Solo la inversión pública podía contener el desplome y el resultado fue que la crisis de deuda del sector privado arrastró al sector público. De hecho, en 2012 la deuda pública ya se situaba en un 156,6 % del PIB en Grecia, un 127 % en Italia o un 123 % en Portugal.⁵⁶

En el corto plazo, sin embargo, esta solución no podía llegar muy lejos. En este aumento de las primas de riesgo que pagaban estos países por seguir endeudándose⁵⁷ y sometidos a un sistema monetario europeo que impedía de-

⁵⁴ El saldo por cuenta corriente (% PIB) representa el superávit o el déficit del total de la economía en sus operaciones corrientes (intercambios de bienes y servicios, rentas primarias y transferencias corrientes) con el resto del mundo.

⁵⁵ VV. AA., *Fracturas y crisis en Europa...*, pp. 119-122.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 127.

⁵⁷ Como hemos visto, el problema de la mayoría de los países en 2008 no era exactamente el volumen de deuda, sino que el diferencial que se pagaba por la deuda

preciar su moneda, distintos gobiernos de la Zona Euro se vieron en una situación de impago y, por lo tanto, de quiebra. Para salvar la situación, se abrió una ronda de negociación en la que participaron el FMI, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo. La célebre «Troika» se planteó la misión de reflotar las economías europeas a cambio de drásticos recortes del presupuesto público.

En medio de toda esta vorágine destaca el contraste y división territorial dentro de la Unión Europea. Mientras Alemania mantuvo una deuda privada de poco más del 127 % del PIB y fuertes posiciones exportadoras de capital y de manufacturas a nivel internacional, otros países como Grecia se vieron forzados a imponer severos recortes, determinados por la intervención de sus cuentas por parte de la Troika. Alemania se convertiría así en el gendarme europeo durante la crisis sellando una fuerte diferenciación entre la Europa del sur, los famosos PIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España), y las solventes economías de Centroeuropa.

VIII

La crisis de deuda de 2008 se debe entender como otro episodio dentro de la onda larga de la crisis que empieza en 1973. La creciente falta de competitividad de las economías europeas, especialmente frente a las economías asiáticas,⁵⁸ habían llevado al continente a un modelo de crecimiento frágil a partir de la década de 1980. Sostenido con altas dosis de deuda privada y —más tarde— de deuda pública, la devaluación general de los activos financieros y la crisis de deuda no hicieron más que ahondar en la pendiente de pérdida de competitividad de las economías europeas iniciada ya en la crisis de la década de 1970.

Como respuesta a la crisis de 2008, en 2010 la Comisión Europea proyectó el denominado Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEFF), que contó de partida con más de 440.000 millones de euros, de ayuda a los distintos Estados miembros. A su vez, el Banco Central Europeo generó distintos programas de compra de deuda soberana con el fin de salvar de la quiebra las cuentas de distintos países como España, Portugal, Grecia, Irlanda o Italia.

Aquellas medidas tenían, sin embargo, una importante contraparte. A caballo de las mismas, el gobierno de la crisis viró hasta convertirse en lo que deberíamos considerar como un ejercicio de autoritarismo político. De modo similar a los programas de ajuste estructural, que desde los años ochenta se han aplicado a los países del sur global, la Troika impuso condiciones draconianas a cambio de los préstamos. El rescate se concretó para Grecia en dos rondas de préstamos, en mayo de 2010 y marzo de 2012, en noviembre de 2010 Irlanda entró igualmente en situación de impago con su consiguiente

se disparó: la deuda pública como valor financiero se devaluó en extremo e hizo que los intereses de la deuda se multiplicasen.

⁵⁸ Damien Millet y Éric Toussaint (dirs.), *La deuda o la vida. Europa en el ojo del huracán*, Barcelona, Icaria, 2011, pp. 137-139.

rescate, el 7 de abril de 2011 lo hizo Portugal y en julio de 2012 España firmó un Memorándum de Entendimiento con la Comisión Europea, que intervenía su sistema bancario. Así, entre 2010 y 2013 estos países impusieron recortes equivalentes a entre un 3 % y un 7 % de su PIB.⁵⁹

La restricción presupuestaria afectó al personal de sanidad y educación, implicó bajadas salariales también de los funcionarios, reformas en el sistema de pensiones y en los subsidios de desempleo, así como un mayor control por parte de Europa de las cuentas nacionales. Se impusieron además reformas constitucionales —siguiendo el dictado alemán— que obligaban a los gobiernos al pago de la deuda pública por encima de cualquier otra prioridad de gasto. En esta espiral de privatizaciones públicas con el fin de sanear las cuentas se llegó incluso a proponer que Grecia vendiera la Acrópolis de Atenas para financiar sus deudas.

En medio de la crisis, parecía que la canciller alemana Angela Merkel y su ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble hubieran tomado las riendas. La lógica ordoliberal volvía a imponer la receta de nuevo autoritarismo fiscal. Se trataba además de reforzar la posición de Alemania al reforzar su dominio fiscal sobre el resto de los Estados europeos.⁶⁰

A efectos de la política nacional, las consecuencias de aquella crisis y la imposición de todo tipo de recortes en las economías europeas, lograron trastocar por primera vez los arcos parlamentarios de media Europa. El auge de nuevos partidos de izquierdas, como Syriza en Grecia (2012), Podemos en España (2014) o el más ambiguo Movimiento 5 Estrellas (2009), así como más tarde la Francia Insumisa (2016), fueron el resultado de las fuertes movilizaciones y protestas de aquellos años. Considerados en conjunto, se puede decir —como señala Susan Watkins— que la crisis europea despertó enormes fisuras en la vieja sociedad civil del continente.

Por otra parte, a partir de 2014, pasados los peores efectos de la crisis se dio paso además a un nuevo fenómeno político: el auge de los partidos de derecha radical. En esos años se observó el crecimiento o la fundación de nuevos partidos como Fidez en Hungría, el FPÖ en Austria, Alternativa por Alemania, el Partido por la Libertad en Países Bajos, Hermanos de Italia, VOX en España o Alianza Nacional en Francia. La peculiaridad del crecimiento de estos partidos estaba en que correspondía con la crisis y caída de los partidos de izquierda que se habían visto impulsados en los años de crisis. En medio de la pandemia de la covid-19 y tras la ola inflacionaria posterior, las propuestas de la derecha radical empezaron a adquirir un nuevo sentido para una parte creciente de las poblaciones europeas.

El estancamiento del PIB europeo, y especialmente de Alemania, que en 2024 parece va a quedarse por debajo del 1 %, el deterioro de las industrias

⁵⁹ Datos AMECO, database Unión Europea.

⁶⁰ Alessandro Somma, *La dittadura dello spread. Germania, Europa e crisis del debito*, Roma, Derive Approdi, 2014.

del continente, cada vez menos capaces de competir con China, incluso en los nuevos sectores emergentes de la economía verde (movilidad eléctrica, energías renovables, baterías) y la caída de las exportaciones forman los tres elementos claves de la actual dinámica de crisis. A esto se debe añadir la ruptura —forzada por la invasión rusa de Ucrania de 2022—, de la alianza estratégica en la importación de gas que los gobiernos germanos mantenían con Rusia. En estas condiciones y a diferencia de 2008, Alemania no ha podido imponer las condiciones de la vuelta al redil económico por vía de la austeridad. Y salvo el temporal incremento de los tipos de interés por parte del BCE con el objetivo de combatir la inflación, se ha permitido mantener una relativa expansión del gasto público con el fin de sostener la economía europea.

Es en este contexto en el que tenemos que explicar el auge de las posiciones de la derecha radical. La pregunta que habría este artículo era si estas serán capaces de desviar las bases operativas de la construcción europea hacia gobiernos despóticos o cuasidictatoriales de corte nacional; y si estamos ante una nueva época de innovación política conservadora de la misma escala que impuso la contrarrevolución thatcherista en la década de 1980, y que en Europa continental como se ha visto tuvo una declinación bastante particular.

Como vamos a ver, la extrema pluralidad de los programas de las derechas radicales solo tiene un punto en común, que se refiere a la cuestión migratoria y al rechazo de las minorías racializadas. En otros puntos, incluida la cuestión de género, aunque en general puedan tener un discurso conservador, sus discursos y políticas se muestran bastante dispares. Así en lo que se refiere a los derechos de las disidencias sexuales y de género, la posición de las derechas radicales puede ir desde el homonacionalismo⁶¹ —sobre todo

⁶¹ En realidad, el término homonacionalismo no nació para describir estrategias discursivas de las nuevas derechas radicales sino del liberalismo estadounidense. En *Ensamblajes terroristas* (Barcelona, Bellaterra, 2017), Jasbir Puar, la teórica queer que acuñó el término, explicó cómo en los EEUU post 11 de septiembre, parte de los movimientos de disidencias sexuales apoyaron el nuevo discurso racista y patriótico de la guerra librada «por el bien de los homosexuales y las mujeres» en Afganistán o Irak. Se produjo aquí una confluencia de los intereses de un sector de los homosexuales y los del nacionalismo estadounidense. Algunas figuras públicas y parte del movimiento de disidencias sexuales apoyaron la guerra a cambio de políticas favorables a su causa. Según Puar, estas políticas de integración incluyeron a una parte de las personas LGT-BIQ+ dentro del Estado nación a través del matrimonio gay y el parentesco reproductivo. Puar describe así una transición de la relación entre los sujetos queer con los Estados nacionales, donde estos sujetos han pasado de la exclusión a asociarse a formas de vida respetables en términos productivos e incluso reproductivos —matrimonio gay y familias diversas—. Las políticas de reconocimiento implican que algunos cuerpos homosexuales pueden ser integrados siempre que encajen en los parámetros de raza, posibilidades de consumo, normatividad de género y parentesco, e integridad corporal, mientras se excluye a otros que no se adecúan a estas formas de vida que definen nuevas normatividades. Así, el homonacionalismo sirve para articular una crítica a los discursos de derechos liberales de gays y lesbianas y cómo esos discursos producen narrativas de progreso y modernidad que continúan otorgando a algunas poblaciones

en Europa occidental— hasta la homofobia más abierta especialmente en los países de Europa del Este. Sea como fuere, parece improbable que la derecha radical disponga de un proyecto europeo. Y sin embargo, las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 se presentaron como un plebiscito frente a la «extrema derecha», que enfrentaba de un lado la democracia y del otro el autoritarismo. ¿Estamos realmente ante un desafío tan radical como para poner en crisis el núcleo de la constitución europea?

IX

Los resultados de las elecciones europeas reflejaron, en efecto, un aumento significativo de los partidos de derecha radical en varios países clave como Francia, Italia y Alemania.⁶² A pesar, no obstante, de estos avances, los dos grupos mayoritarios del Parlamento Europeo han seguido siendo los herederos de las dos grandes orientaciones políticas que conformaron la Unión: la democracia cristiana —el Partido Popular Europeo con 190 escaños— y la socialdemocracia —con 136—. Estos dos bloques, junto con liberales y verdes sumaron 450 escaños en un parlamento de setecientos.

Sin embargo, la interpretación privilegiada del proceso en medios y redes ha sido que estas elecciones mostraban el ascenso imparable de las fuerzas de derecha radical en todo el continente, lo que suponía una amenaza existencial para la propia democracia o incluso para la UE. La narrativa en esta ocasión no se alejó mucho de la que han hecho los partidos de izquierdas sobre el ascenso imparable de «un nuevo fascismo europeo», con toda su carga emocional, con el objetivo de agrupar las propias fuerzas, impulsar el voto y recuperar una nueva épica con la que volver a agrupar filas.

La interpretación habitual de la emergencia de estos actores ultras es la de que son una respuesta radical, en ocasiones violenta, a este contexto generalizado de crisis. Volvemos, por lo tanto, a nuestra pregunta inicial: ¿existe algo así como una necesidad de actores nuevos para articular una salida de

acceso a la ciudadanía a costa de la delimitación y expulsión de otras poblaciones. En las derechas radicales, el homonacionalismo sirve fundamentalmente para fundar la incompatibilidad de musulmanes y migrantes con los valores liberales, de modo que su xenofobia y racismo aparecen disfrazados de preocupación por los derechos o la integridad física de las disidencias sexuales. La versión de esta estrategia que usa a las mujeres e incluso al feminismo se le denomina feminacionalismo y podemos encontrar una de sus explicaciones más interesantes en S. Farris, *En nombre de los derechos de las mujeres: el auge del feminacionalismo*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2021.

⁶² En estas elecciones, en Francia, Rassemblement National (RN), liderado por Marine Le Pen, consiguió un 31,3 % de los votos, superando ampliamente al partido del presidente Emmanuel Macron, que apenas alcanzó el 14,6 %. En Italia, Giorgia Meloni reafirmó su posición de liderazgo en el país con 28,7 % de los votos, mientras que Alternative für Deutschland (AfD) experimentó una subida importante que se tradujo en 15 escaños en el Parlamento Europeo, aunque sus resultados no alcanzaron las expectativas que se habían creado.

tipo autoritaria a la crisis? ¿O, por el contrario, esta salida autoritaria ya está inscrita como posibilidad en la propias formas de gobierno de Europa? El centro del debate pasa por dilucidar si estas derechas radicales tienen realmente un proyecto alternativo capaz de reconducir el conjunto del proceso europeo.

Como se ha dicho, cuando hablamos de derechas radicales estamos hablando de una pluralidad de fenómenos que distan mucho de disponer tanto de coherencia ideológica como de unidad de acción. Podemos encontrar desde una Marine Le Pen con su chovinismo del Estado del bienestar —que asociamos a una ultraderecha renovada— o una Giorgia Meloni y su propensión neocatólica hasta neonazis como Amanecer Dorado; pasando por las políticas de gasto social en defensa de la familia de Viktor Orbán, que mezcla con sus conocidas propuestas políticas en el marco de lo que llama una democracia «iliberal». Este dinamismo y la capacidad de adaptación de este campo político ha permitido su adaptación a realidades regionales y culturales diversas, con posiciones políticas que a veces son incluso antagónicas. Los partidos de la derecha radical se adaptan así a los contextos locales, a su historia, su cultura y las especificidades locales, al tiempo que presentan doctrinas, estilos y modos de acción diferenciados. La amplitud del espectro ideológico de estas derechas es, por lo tanto, enorme. De esta pluralidad —de la dificultad de definir un programa compartido— podemos deducir también sus debilidades e incoherencias a la hora de proponer un verdadero proyecto alternativo de gestión de la crisis, así como la evidencia de que no siempre están tan lejos de lo que son las formas de la política convencional características del *establishment* europeo.

A menudo se discute si el «centramiento» o «moderación» de estas formaciones implica también una fuerte renovación⁶³ de sus discursos e idearios, como resultado de la necesidad de ampliar su base de votantes con el fin de acceder al gobierno. Este desplazamiento hacia el centro es además coincidente con el giro de muchas formaciones políticas de derecha tradicional que han radicalizado sus discursos en una línea populista, que a veces calca posiciones que antes calificábamos de extrema derecha. En cierto modo, se podría decir que se está produciendo una «convergencia de las derechas».⁶⁴

De cualquier modo, más allá de su diversidad, dichas agrupaciones se reconocen entre sí, se apoyan y comparten argumentos y recursos de todo tipo. Igualmente comparten un estilo disruptivo parecido. De hecho, buena

⁶³ Se ha hablado mucho de los procesos de normalización o de «desdiabolización» de estos partidos, del que el paradigma podría ser la Agrupación Nacional francesa (RN). Su origen es un partido fascista clásico, el Frente Nacional, que tuvo cierta presencia en la década de 1980 pero que pronto se enfrentó a su propio techo de crecimiento hasta que asumió el liderazgo de Marine Le Pen que fue limando las aristas más ultras del partido hasta conseguir una transformación radical de su imagen pública. Su éxito ha sido tal que ha llegado a disputar la presidencia de la República en la segunda vuelta de las elecciones de 2017 y 2022.

⁶⁴ David Renton, *The New Authoritarians Convergence on the Right*, Haymarket Books, 2019.

parte de estos partidos han hecho suyo el deseo de transgresión: se presentan como la alternativa antisistema que capitaliza el descontento social, con líderes que a menudo hacen gala de su inexperiencia, o de su capacidad de subvertir lo «políticamente correcto» o de decir la verdad contra todas las otras opciones existentes. Otro de los elementos comunes de estas derechas radicales es la función de soslayar el conflicto de clases, desviando la atención contra chivos expiatorios como los migrantes, el feminismo o lo que llaman «marxismo cultural», sobre todo en las guerras culturales.⁶⁵ En este sentido, el nativismo racista —como ya hizo el *thatcherismo*— se presenta como una herramienta capaz de producir cohesión social en momentos de crisis.⁶⁶

En conjunto y a diferencia del proyecto compacto de Margaret Thatcher o incluso del cierre autoritario ordoliberal frente a la crisis europea, entre las derechas radicales no existe unidad —como venimos señalando— ante las cuestiones clave que sustentan la gobernabilidad de Europa. No hay por ejemplo acuerdo respecto de la construcción europea, difícil de romper sin llevar a los distintos Estados miembros a un encierro sobre sus ya inexistentes economías nacionales. Tampoco la tienen en lo relativo a los Estados del bienestar y los servicios públicos, base de la estabilidad política de cada una de sus sociedades civiles o en lo que se refiere a sus políticas económicas, a veces indistinguibles de los viejos preceptos neoliberales y en otras de inspiración propiamente socialdemócrata.

X

Uno de los puntos en el que merece discutir la supuesta unidad de las derechas radicales es el referido a su política de género. A menudo se dice que estos actores apuestan por una política sexual de tipo conservador. Pero incluso aquí habría que diferenciar entre los distintos partidos que responden a la configuración cultural y la historia política de las distintas regiones. En Europa occidental, existe un amplio consenso formal en favor de la igualdad de género y los derechos de las disidencias sexuales, con amplias mayorías

⁶⁵ Usamos aquí este concepto en el sentido de lo teorizado por Thomas Frank en *¿Qué pasa con Kansas*, Madrid, Acurela & A. Machado Libros, 2008. Estas serían confrontaciones políticas y sociales que giran en torno a valores morales o creencias fundamentales sobre la identidad nacional. Las guerras culturales se convirtieron en un instrumento para que las diferencias de clase o la lucha por la redistribución dejaran de ser determinantes para el voto, desplazando el eje de la lucha política hacia estas disputas de valores morales y culturales.

⁶⁶ Nicos Poulantzas analizó este mecanismo respecto de su uso por el Estado que utiliza el nacionalismo, el racismo y otras formas de ideología reaccionaria para integrar a las masas y asegurar su dominación. Estas ideologías actúan como mecanismos de cohesión social que ocultan las divisiones de clase, redirigen el descontento popular hacia chivos expiatorios y justifican el fortalecimiento del aparato represivo del Estado. En última instancia, permiten que el Estado mantenga su control sobre una sociedad cada vez más fragmentada y en crisis, mientras preserva las estructuras del capitalismo. Nicos Poulantzas, *Estado, Poder y Socialismo*, Madrid, Siglo XXI Editores, 2021.

que apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como el aborto. Sin embargo, en Europa del Este, el renacimiento del tradicionalismo y el nacionalismo tras la disolución de la URSS ha conducido a una mayor resistencia a estos derechos, con amplios segmentos de la población que rechazan tanto la homosexualidad como el aborto. Es inevitable pues, que esta fractura se refleje también en la configuración de los discursos y los programas a uno y otro lado de la frontera. En Europa del Este, las derechas radicales tienen propuestas más abiertamente conservadoras respecto del género, que a veces son directamente homóforas. Es el caso del Pis polaco o del Fidesz húngaro que ha prohibido la adopción por parte de parejas homosexuales o la difusión de contenidos sobre disidencias sexuales a los niños.

En cambio en Europa occidental, estos partidos tienden a tratar de encajar en algunos consensos existentes para escapar de la marginalidad, si bien en ocasiones se apoyan en discursos que aparecen como «políticamente incorrectos» con la función de componer o activar el voto desafecto al sistema de partidos. Formaciones como Agrupación Nacional en Francia o Demócratas de Suecia han tenido así que renovar su retórica, moderando sus posiciones sobre el género con el fin de atraer a un electorado más amplio. También han jugado otras cartas como la de incluir a más mujeres en los puestos de responsabilidad —incluso convirtiéndolas en las caras visibles—, así como a personas homosexuales—. De hecho, la mayoría de partidos políticos con opciones electorales no hablan de una vuelta de las mujeres al hogar o de la asunción de roles tradicionales en la división sexual del trabajo.

De hecho, si bien las sociedades europeas votan cada vez más a la derecha radical, se han vuelto cada vez más seculares y tolerantes en cuestiones de moral.⁶⁷ Hungría, por ejemplo, es uno de los países europeos donde se practican más abortos pese a la retórica inflamada de su dirigente.⁶⁸ En Francia, por otra parte, Marine Le Pen no se opone abiertamente al aborto y votó a favor de su inclusión en la Constitución francesa como derecho fundamental —aunque esta decisión fue controvertida dentro de su propio partido, ya que algunos miembros se opusieron o se abstuvieron—. Mientras, en Países Bajos, Geert Wilders, ganador de las elecciones de diciembre de 2023, tiene un programa decididamente liberal en materia de moral. Wilders dice apoyar los derechos LGBTQ+, incluido el matrimonio homosexual, en tanto muestra de la «superioridad nacional de los Países Bajos» o de la «cultura europea» —lo mismo que hacen otros partidos de extrema derecha de los países nórdicos—. Como parte de su retórica xenófoba e islamófoba, esto le permite a Wilders contraponer los valores liberales al islam, considerado homófobo y retrogrado. Incluso VOX, en España, tiene discursos más cercanos a este homonacionalismo que a la homofobia explícita de los países de Europa

⁶⁷ Oliver Roy, *L'Aptissement du monde: La crise de la culture et l'empire des normes*, París, Seuil, 2022.

⁶⁸ Datos de Eurostat. https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_fer-trepre_reprights_demo_fabortind

oriental. Y esto aun cuando pueda oponerse a las banderas del arco iris en los edificios públicos o a los colectivos de las disidencias sexuales a los que llama «chiringuitos ideológicos» o «lobby LGTBI» —en un esquema parecido a la retórica que utiliza para oponerse al feminismo—.

En conjunto, casi todos estos partidos tienen que hacer distintas componendas para no oponerse a los consensos sociales de sus respectivos países. También encontramos dentro del espectro de las derechas radicales de Europa occidental posturas más radicalizadas —al menos en el nivel del discurso—. Este es el caso de Giorgia Meloni, que combina su defensa de la «familia natural» con un rechazo a los derechos de las disidencias sexuales y al feminismo, lo que parece situar a Hermanos de Italia como una suerte de renacimiento neocatólico. Pese a esta retórica, sin embargo, una vez en el gobierno, las políticas antigénero de Meloni han sido más bien tibias.⁶⁹ Como Meloni, el Partido de la Libertad Austriaco, o VOX, proponen limitaciones al aborto pero sin abogar por una prohibición completa; al mismo tiempo dicen que están a favor de las uniones civiles de parejas del mismo sexo pero en contra de su consideración como «matrimonio». Hay que señalar aquí que buena parte de las políticas que pueden ser consideradas «de género» son transposiciones de directivas europeas o están impulsadas por sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y no existe un amplio margen para oponerse a las mismas.⁷⁰

⁶⁹ Las políticas antigénero son iniciativas o medidas legislativas que se oponen a las teorías y estudios sobre el género y los derechos de las personas LGBTQ+. Estas políticas suelen presentarse como una defensa de los «valores tradicionales» o la «familia natural» y buscan limitar o revertir avances en derechos y reconocimientos legales relacionados con la identidad de género y la orientación sexual. Véase por ejemplo: R. Kuhar y D. Paternotte, (eds.). *Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilizing against Equality*, Rowman & Littlefield International, 2017. Por ejemplo, en la cuestión del aborto, Meloni ha prometido respetar la ley del aborto existente, pero permite que los grupos antiabortistas puedan acceder a hospitales públicos y clínicas de planificación. También ha prometido luchar contra los abortos dando ayudas a las madres por cada hijo. Respecto de los derechos de las disidencias sexuales, su medida más controvertida ha consistido en impedir la transcripción de los certificados de nacimiento de aquellos progenitores que no aporten material genético a los hijos, lo que afecta a aquellos bebés nacidos por gestación subrogada o reproducción asistida e inscritos en el extranjero como padres. Antes de esta disposición, los registros locales reproducían las actas de filiación obtenidas en el extranjero, de manera que muchas parejas homosexuales utilizaban esta vía para figurar ambos como padres. (El matrimonio homosexual no es legal en Italia aunque sí las uniones civiles, pero a las parejas del mismo sexo no se les permite la adopción ni técnicas reproductivas como la fecundación asistida). La justificación ha sido la de luchar contra la práctica de la gestación subrogada en otros países.

⁷⁰ Esto vale tanto para las derechas como para las izquierdas en el gobierno. Así, la coalición de gobierno también ha recibido varias amonestaciones a este respecto. Por ejemplo, en 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la exclusión de las trabajadoras domésticas de la prestación de desempleo era contraria

XI

Algo que sin embargo es común a todas estas derechas es el entrecruzamiento de los ejes sexual y racial; fundamentalmente porque en este cruce bascula su estrategia nativista. En el centro de este discurso está la incompatibilidad del islam y el liberalismo europeo. Atribuyen así el machismo y el conservadurismo a quienes provienen de «otras culturas», que consideran menos avanzadas. Especialmente los musulmanes son considerados una amenaza para los derechos o la integridad física de mujeres y disidencias sexuales. Esto les permite disfrazar su xenofobia como una defensa de los «valores europeos», al tiempo que se muestran próximos a las agendas del feminismo y de la militancia LGTBIQ+ sobre la violencia o los derechos.

Ante este panorama, habría que interrogarse también sobre la cuestión de si estas opciones suponen una nueva coalición de valores conservadores coherentes y un proyecto político capaz de reconstruir una Europa conservadora, «blanca» y cristiana. En otras palabras, si estamos asistiendo a una suerte de «Mayo del 68 al revés», a «una nueva contrarrevolución conservadora». Para responder a esta pregunta conviene considerar que en Europa occidental, se vota a los populistas de derecha en contra de las élites, Bruselas o el islam, pero no a favor del retorno de la familia tradicional,⁷¹ a la que por múltiples razones (también económicas) resulta imposible volver.⁷² Ciertamente, buena parte de los partidos europeos han asumido las migraciones como un problema, lo que implica una afirmación de los «valores europeos» liberales, esta vez anclándolos en el miedo al otro. Pero como hemos explicado, estas opciones no suponen necesariamente una vuelta a los valores tradicionales o a la familia «natural», del mismo modo que el liberalismo no es necesariamente un garante del derecho.⁷³

Las derechas radicales contraponen los supuestos valores europeos a los de los migrantes y musulmanes, pero su contenido es contradictorio. Como explica el filósofo Oliver Roy, unos identifican estos valores comunes con una Europa cristiana y sus tradiciones —lo que en realidad implica hostilidad a la libertad sexual y al matrimonio homosexual—, mientras que otro sector de estas mismas derechas destaca la libertad de la moral europea frente a la supuesta intolerancia de los musulmanes —se defiende el feminismo frente al velo y los derechos LGBT frente a la homofobia religiosa⁷⁴—. A veces, incluso, los mismos actores manifiestan estos discursos contradictorios.

a la legislación de la Unión y constituye una «discriminación indirecta por razón de sexo». En 2024, la Comisión Europea también denunció a España al TJUE por incumplir la Directiva de Conciliación en la transposición de un nuevo permiso parental.

⁷¹ Marie Lemonnier: «¿Europa sigue siendo cristiana? Entrevista a Olivier Roy», *Nueva Sociedad*, núm. 285, enero-febrero de 2020.

⁷² Tras la incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo en Occidente, el descenso de los salarios y otros factores —como el aumento del gasto empleado en la crianza de los hijos— hacen que solo un pequeño tanto por ciento de la población pueda vivir de un único ingreso.

⁷³ Oliver Roy, *L'Aplatissement du monde...*

⁷⁴ *Ibidem*.

Además, la frontera entre derechas radicales y liberales se difumina cuando en lugares como Francia, por ejemplo, la defensa del laicismo se utiliza fundamentalmente para atacar al islam. La prohibición del uso del hiyab en escuelas públicas y los reiterados debates sobre la vestimenta islámica en espacios públicos son ejemplos de cómo la islamofobia se ha institucionalizado, presentándose como una afirmación de la identidad secular frente a la influencia de lo que se percibe como una religión foránea y opresiva. De hecho, estas prohibiciones son hoy apoyadas por un amplio espectro, incluido al presidente de «centro-derecha» Emmanuel Macron.

Valga decir que, según Roy, los que mejor defienden una Europa identitaria son en realidad los liberales: los valores «europeos» que se oponen a los de musulmanes / migrantes son precisamente los valores que se atribuyen al liberalismo en términos de moral y costumbres. Esto implica una transformación autoritaria del liberalismo político que nada tiene que ver con el retorno de un orden moral.⁷⁵ El mejor ejemplo de este desplazamiento lo proporciona Dinamarca, donde el partido socialdemócrata ha aplicado la política de exclusión y asimilación forzosa de migrantes más restrictiva de toda Europa, precisamente en nombre del modelo social europeo y sus valores. Por su parte, en Francia, el aborto se consagra en la Constitución al mismo tiempo que se aprueban las leyes de inmigración más estrictas. «El liberalismo político se ha desplazado hacia una posición autoritaria, pero defiende un “modo de vida” liberal, siempre que se esté en el lado correcto de la valla», concluye Roy.⁷⁶

XII

¿Cuál es por tanto el eje definitorio más acabado de las derechas radicales europeas? Este es sin duda la cuestión migratoria: la afirmación de un etnonacionalismo de matriz europea contrario a la inmigración. En el continente, este punto es heredero de la islamofobia de matriz colonial. Pero tiene su precedente inmediato en el ataque sobre las Torres Gemelas de 2001, a partir del cual el islamismo ha sido caracterizado como la mayor amenaza para los países occidentales.⁷⁷

Lo que se denominó «crisis de refugiados» —el millón largo de personas que llegó a Europa entre 2014 y 2016 huyendo de conflictos armados, de la pobreza y de los efectos del cambio climático en Oriente Medio— fue también un factor determinante en este crecimiento del etnonacionalismo antimusulmán. En una situación todavía dominada por las políticas de austeridad, los migrantes o los otros musulmanes cumplieron un papel fundamental de cohesión social por oposición a un «otro» más imaginado que real. El historiador Enzo Traverso define este ecosistema ultra como la forma política que resulta de la conversión de la indignación generalizada de las masas

⁷⁵ *Ibidem.*

⁷⁶ *Ibidem.*

⁷⁷ Enzo Traverso, *Las nuevas caras de la derecha*, Madrid, Siglo XXI Editores, 2021.

ante las condiciones de la existencia social, en nacionalismo, racismo y conflicto etnocultural, sin cuestionar en lo más mínimo las formas dominantes del liberalismo autoritario. Antes al contrario, este sirve de complemento a estas formas políticas autoritarias, actuando como palanca para normalizar políticas antaño consideradas extremas e inaceptables, al tiempo que crea un falso adversario que las legitima.⁷⁸ Asociados a las migraciones, también en la intersección entre género y raza, aparecieron los terrores demográficos, que utilizan el descenso de las tasas de natalidad para impulsar un pánico anclado en el miedo a la «sustitución» de las poblaciones europeas —o estadounidenses— por musulmanes o migrantes.

En este fenómeno encontramos también una redefinición de la idea de pertenencia, que excluye a aquellos que, aunque ciudadanos de pleno derecho, son percibidos como culturalmente ajenos a la identidad nacional, aun cuando se trata de descendientes de lo que alguna vez fueron territorios de los imperios europeos —como es el caso de los hijos y nietos de la migración africana en Francia—. Este marco se refuerza además con el populismo punitivo y los discursos securitarios. Para algunos analistas, la equiparación de los afrocaribeños, o de los negros en general, con la delincuencia, las drogas y el terrorismo, que como hemos visto se origina en la Inglaterra de los años sesenta y setenta, se encuentra ya en los cimientos de la construcción europea. Esta concepción securitaria, que entiende la inmigración como una cuestión de «ley y orden», estaría por tanto inscrita en las instituciones europeas, sobre todo en lo que podríamos llamar su cara oculta. Mientras que su fachada visible serían las instituciones formales —el Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento—, los Estados del bienestar, la democracia y sus clases medias nativas.

La idea de una dimensión oculta del proyecto europeo coincidiría así con un aparato supraestatal que, en gran medida, no rinde cuentas ni es democrático en su funcionamiento, al tiempo que refleja el lado represivo del desarrollo político europeo. En este deberíamos incluir los acuerdos informales de cooperación interpolicial, organizaciones como el Grupo de Ministros de Trevi (1976) —ministros de justicia y de interior de los distintos gobiernos—, el Grupo Ad Hoc sobre Inmigración (1986) o el propio acuerdo de Schengen (1985 y 1990)⁷⁹ que también tiene funciones securitarias. Igualmente se debería incluir aquí a Frontex —la agencia europea de guardia de fronteras y de costas—, una entidad independiente, opaca y sin control democrático que opera como el primer cuerpo policial de la UE.⁸⁰

⁷⁸ Enzo Traverso, «Les spectres du fascisme. Penser les droites radicales au XXI^e siècle», *Mouvements*, núm. 96-97 (4), 2018, pp. 105-116.

⁷⁹ Véase a este respecto Toni Bunyan, «Hacia un Estado europeo autoritario», *Race & Class*, núm. 32 (3), enero-marzo, 1991, pp. 19-30.

⁸⁰ La agencia ha creado el Cuerpo Permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que es el primer servicio uniformado de la Unión Europea. Este cuerpo está compuesto tanto por empleados de Frontex como por oficiales cedidos por los Estados

En este sentido, cabe preguntarse si realmente la única propuesta consistente de las derechas radicales es la relativa al control de las migraciones y las subordinación de las minorías poscoloniales —consideradas no del todo europeas—. Y si esta no sería ya algo inscrito en la dimensión oculta de la constitución europea: esto es, en los mecanismos autoritarios, que responden también a esta pendiente nativista, y que están insertados justo detrás de su fachada aparentemente liberal.

De hecho, las políticas migratorias de la UE contienen en sí mismas un proyecto de segmentación de las poblaciones según el acceso a determinados derechos, que luego encuentra su justificación en el racismo más descarnado de las derechas radicales. Esta afinidad entre las políticas migratorias que encajan en el universo ultra podrían estar representadas por el modelo penitenciario de acogida de refugiados —recordemos los infames campos en Moira y otras islas del Egeo o en otros países europeos como Serbia—; o en el sistema de detención de inmigración que trata de capturarlos antes de que lleguen a sus costas. También se deberían aquí analizar todos los protocolos impulsados por la UE con países como Turquía y Libia, encargados de dejar morir en la frontera a las personas migradas cada año. Todo esto mientras se financia la construcción de hasta 21 centros de detención fuera de las fronteras europeas. La vuelta de tuerca autoritaria de la UE se percibe asimismo en las nuevas restricciones de derechos de los migrantes implícitas en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, impulsado recientemente por el socialdemócrata Pedro Sánchez y la ultraderechista Giorgia Meloni. Este pacto determina la creación de zonas de detención en las fronteras, que incluye tanto a menores no acompañados como a familias con niños.

Independientemente por tanto de los discursos que tengan los distintos partidos sobre la inmigración, los gobiernos liberales aplican políticas que, en esencia, reflejan las demandas de las derechas radicales. Mientras que los partidos liberales y socialistas pueden presentar sus políticas migratorias en términos moderados, como una gestión de los flujos migratorios «racional» y basada en la «seguridad nacional» o incluso en «la lucha contra las mafias del tráfico de personas», las derechas radicales hacen explícita las implicaciones xenófobas y racistas que subyacen a estas políticas. En este sentido, el liberalismo y las derechas radicales no representan necesariamente posiciones antagónicas, ambos operan dentro de los marcos de gestión estatal de la integración diferencial o de la exclusión de ciertas poblaciones. Ambos sistemas promueven la posibilidad de mayores cotas de explotación laboral de migrantes e imponen políticas de exclusión, independientemente de que lo hagan con narrativas diferentes. Parece, pues, que el gran consenso

miembros de la UE. Para 2027, se espera que el cuerpo alcance los 10.000 efectivos, de los cuales aproximadamente 3.000 serán empleados directamente por Frontex. Este personal realiza tareas operativas en las fronteras exteriores de la UE y en países no pertenecientes a la UE con acuerdos específicos, como el control fronterizo, la vigilancia y las expulsiones de migrantes.

en materia migratoria tiene que ver con elegir entre dos opciones: políticas de derecha radical explicadas mediante discursos de derecha radical, que despiertan miedo entre los votantes progresistas y justifican la activación del voto de la izquierda nativa; o, por el contrario, políticas atribuibles teóricamente a la derecha radical que se presentan con discursos progresistas y que mantienen fuera del foco público las políticas de frontera.

XIII

Otro de los rasgos que se suele destacar del fenómeno político de las derechas radicales es su estrecha relación con las fuerzas de seguridad del Estado. En casi todos los países, estos partidos apoyan las reivindicaciones salariales de los cuerpos de seguridad del Estado, así como mayores prerrogativas a la hora de reprimir la protesta o de limitar los controles a los que se ven sometidas sus actuaciones. Podemos percibir estos rasgos también en el populismo punitivo del que hacen gala —pidiendo penas más altas o menores derechos para los penados—, y sobre todo en su tratamiento de las migraciones, siempre vinculadas en su imaginario a la delincuencia y la inseguridad. En este sentido, Giorgia Meloni propuso una ley que suponía un importante endurecimiento penal, lo que incluía la castración química a los violadores. Por supuesto, estos rasgos están contenidos en otras opciones políticas, no son exclusivas de las derechas radicales, si bien estas destacan sin duda por la radicalidad y dureza de sus exigencias.

A veces se discute si estos partidos, debido a sus posiciones iliberales y antidemocráticas, han cruzado las líneas rojas de la democracia europea. El ejemplo más manido de esta crítica es el de Viktor Orbán, que ha conseguido afianzarse en el poder a partir de un liderazgo autoritario, el recorte de las libertades, el ataque a la separación de poderes, etc. De hecho, Orbán explica su idea de «democracia iliberal» en términos económicos, textualmente argumenta que «las sociedades construidas sobre la base de la democracia liberal probablemente no podrán mantener su competitividad».⁸¹

Pero lo cierto es que el giro autoritario va más allá de las derechas radicales. En toda Europa, se han aprobado nuevas leyes represivas, con independencia del signo político del gobierno, dirigidas a la contención de la protesta social. La conocida como Ley Mordaza es un ejemplo⁸² que tendría

⁸¹ Discurso en el 25^o Campamento universitario y estudiantil de 26 de julio de 2014, disponible on line.

⁸² La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 se redactó como reacción a las protestas sociales desencadenadas por la crisis del 2008 y contra la legitimidad creciente que fueron adquiriendo movimientos como la PAH. Impone una serie de multas por faltas administrativas —algunas muy elevadas— de modo que los policías son juez y parte, con una alta discrecionalidad a la hora de sancionar. Incluye numerosas restricciones a la libertad de expresión, ofensas como «faltar el respeto» a la policía; al derecho a la protesta —multa por participar en protestas no autorizadas, o por hacerlo delante de determinados edificios públicos, etc.— e implica un control

su contraparte francesa en la Ley de Seguridad Global de 2021.⁸³ También son aquí interesantes las nuevas normas del gobierno francés contra el «separatismo islamista»⁸⁴ o los intentos de disolución y la represión contra el movimiento ecologista Los sublevados de la Tierra, así como la criminalización de las protestas contra la masacre de Gaza en Alemania o Gran Bretaña. En esta dirección es preciso recordar toda la legislación de excepción aprobada tras los ataques como los del 11-S y los de París en 2015, que aumentan el poder de vigilancia, permiten detenciones prolongadas sin juicio, limitan el derecho a la protesta y expanden las capacidades de las fuerzas de seguridad para intervenir en comunicaciones privadas. Todo este marco confluye con el autoritarismo de las derechas radicales y obstaculiza la rendición de cuentas en el caso de que estos lleguen al gobierno.

XIV

Miradas con detenimiento, por lo tanto, las derechas radicales no representan una propuesta verdaderamente alternativa. Estas fuerzas reaccionarias parecen hoy menos una verdadera alternativa a la Europa existente —con su

sobre la información que sanciona la difusión de imágenes de las fuerzas de seguridad. En el mismo paquete legislativo también se legalizan las «devoluciones en caliente» de los migrantes. Los sucesivos gobiernos progresistas dijeron que iban a derogarla. Sin embargo, al tiempo que se imprime esta revista se está discutiendo más bien su posible reforma. Ya se ha anunciado que no tocará algunos de sus aspectos más lesivos para las libertades públicas, por ejemplo, el reconocimiento que se hace en ella de la «presunción de veracidad» de los agentes, es decir, que las declaraciones y actas formuladas por los agentes de la autoridad tienen valor probatorio por sí solas y bastan para sancionar, de manera que invierte la carga de la prueba: es el ciudadano quien debe aportar evidencias que desacrediten el testimonio del agente si desea impugnar la sanción. En la pasada legislatura se reformó, además, el delito de sedición con el fin de ampliar los delitos por desórdenes públicos, al tiempo que se elevaron considerablemente las penas por ocupar una sede bancaria o las oficinas de un fondo de inversión, aunque sea de manera pacífica. Además, por primera vez, cortar una carretera se ha convertido en delito en España.

⁸³ También amplía las prerrogativas policiales, incluso la de los agentes de seguridad privada, pero al final se aprobó sin algunos de sus artículos debido a las protestas que se desataron durante su discusión. Además, el Consejo Constitucional revisó la ley y declaró inconstitucionales varios artículos.

⁸⁴ La Ley contra el Separatismo en Francia —oficialmente la «Ley que refuerza los principios de la República»—, fue promulgada en 2021 con el objetivo declarado de combatir el extremismo y fortalecer los valores seculares de la República francesa, especialmente en respuesta a ataques terroristas y al crecimiento del islamismo radical. Esta norma apunta contra las comunidades musulmanas. Se vulneran, de esta manera, derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación y de religión, al imponer controles estrictos sobre las asociaciones y lugares de culto. También amplía las restricciones ya existentes al uso del hijab —el pañuelo islámico— en determinados trabajos —las subcontratas estatales—.

doble herencia keynesiana y neoliberal— y más su propia progenie mutante.⁸⁵ Se podría hablar así más bien de un socioliberalismo xenófobo o de un neoliberalismo nativista. Lo cierto es que igual que las derechas radicales no parecen tener un proyecto claro para Europa, tampoco parecen tenerlo las propias élites europeas. Como mucho, se proponen una vuelta de tuerca autoritaria en la gestión. En este sentido, podemos dilucidar la función política de las derechas radicales como expresión de una tonalidad de época: el miedo al desorden de una parte creciente de las poblaciones. La crisis de 2008 y la pandemia de 2019-2020 no han hecho sino ratificar la decadencia económica del continente y el miedo de sus poblaciones.

Donde las derechas radicales parecen haber encontrado su nicho dentro de este marco general de crisis y decadencia europea es en las ansiedades y miedos de las clases medias propietarias nativas. Su papel puede resultar central en la conformación de un nuevo consenso de clase, donde el elemento nativista, xenófobo y racista juega un papel determinante. Por eso, la gestión de las fronteras no es un apartado más de la gestión gubernamental. En la gestión de la población migrante, se define un aspecto central del reparto de la riqueza continental y del papel de estas poblaciones como fuerza de trabajo barata.

De fondo, lo que está en juego —como ha sucedido en las anteriores crisis— es la capacidad de las élites políticas y económicas de articular un sistema efectivo de gobierno de clase que deje lo más intactas posibles a las clases medias que constituyen la médula de las democracias europeas. En este sentido, la «omertá nacional» que proponen las derechas radicales, no es más que una estridente enunciación de la «omertá de las propias clases medias nativas», que deben dirimir la forma del reparto de clase dando por supuesto que este depende de los segmentos de la población que trabajan a bajo coste para mantener sus sistemas de alimentación, servicios, bienestar y cuidados. Como hemos explicado, pese a los discursos estridentes sobre el género de las derechas radicales, es poco probable el retorno a un orden reproductivo del pasado, mientras que lo que está en juego realmente son las condiciones de vida de las migrantes infrarremuneradas a las que se externalizan las tareas de reproducción social.

La llamada izquierda juega en esta confrontación un papel ambiguo. Sin duda, una parte de las viejas izquierdas se ha decantado ya por posiciones racistas y xenófobas, a veces disfrazadas de preocupación por la cohesión social, la seguridad, por el desarrollo de los países de origen o incluso por la defensa de la lengua y la cultura. Este nativismo es evidente en la izquierda alemana desde hace décadas, donde el conflicto con Israel separa a buena parte de la izquierda de la realidad musulmana del país, lógicamente posicionada a favor de la causa palestina. Esta decantación se percibe también en los discursos sobre la inmigración de partidos como EH-Bildu en el Estado español o en las políticas migratorias del PSOE, así como en las ambigüedades

⁸⁵ Esta es la tesis de Callison Willian y Zachary Manfredo (eds.), en *Neoliberalismo mutante*, Madrid, Lengua de Trapo, 2022.

respecto de estas cuestiones de partidos como Sumar o Podemos, especialmente cuando tienen responsabilidades de gobierno. También se percibe en la evidente incapacidad para abordar estos asuntos —que ahora mismo constituyen el problema central a partir del cual se articula la lucha de clases en Europa— de otras izquierdas como la italiana, la inglesa o la francesa.

La victoria anticipada de las derechas radicales es que parte de sus discursos ya forman parte del gobierno material de Europa. Como ya sucediese en la crisis de 2008 con la Directiva de Retorno (2008/115/CE), que pretendía expulsar a ocho millones de inmigrantes en situación irregular de Europa, y con las medidas de austeridad financiera impuestas en aquel mismo momento, la Europa autoritaria no necesita de partidos de derecha radical en el gobierno para realizar este programa de segmentación social. Tal y como hemos explicado, las soluciones políticas de los programas de la derecha radical no se alejan de las medidas tomadas en su día por Thatcher —con sus leyes de extranjería— o las ya referidas «soluciones» durante la crisis de 2008.

Los partidos de derecha radical no hacen más que mostrar la dimensión oculta que también constituye a Europa. Al igual que todas las constituciones europeas contemplan el «estado de excepción» con distintos mecanismos y posibilidades, los mercados financieros contemplan la intervención autoritaria de las cuentas públicas europeas y de sus Estados del bienestar. La salida autoritaria a la crisis está inserta en el propio ADN del gobierno del continente.⁸⁶ Sin solución a la vista para la crisis europea, el juego político solo puede pasar por posiciones neoconservadoras, entendidas estas como el mecanismo de defensa más eficaz para evitar una política «excesivamente generosa» con respecto de los proletariados migrantes, que se han vuelto esenciales en el sostenimiento de la economía europea, así como en la reproducción de sus clases medias.

Pero este modelo conservador no se debe comprender como una característica de la derecha. Es y será la base de la política europea en los próximos años. Hoy Europa es una colección de democracias atenuadas, apoyadas cada vez más en aparatos punitivistas y securitarios. Estos tratarán por todos los medios de preservar la posición de sus élites y de mantener a flote a una parte importante de sus clases medias. Se trata de una labor doblemente compleja

⁸⁶ Se podría hacer aquí una analogía con el concepto del politólogo marxista Nicos Poulantzas, «fascistización», que define como el movimiento progresivo hacia el establecimiento de un régimen fascista, caracterizado por la intensificación de la represión estatal, la supresión de la democracia y la promoción de ideologías nacionalistas y autoritarias. Durante este proceso, el Estado adopta medidas más coercitivas, restringe libertades civiles, y utiliza la violencia y la propaganda para consolidar su hegemonía. Poulantzas también explica cómo el Estado intenta integrar ideológicamente a las masas a través del nacionalismo, el racismo, y otras formas de ideología reaccionaria. Estos elementos son cruciales para entender cómo la fascistización puede ganar apoyo popular, incluso cuando erosiona las instituciones democráticas. Nicos Poulantzas, *Fascismo y dictadura. La III Internacional frente al fascismo*, Madrid, Siglo XXI, 1973 [1970].

en un continente envejecido y de baja natalidad, donde la incorporación de mano de obra migrante va a seguir siendo necesaria.

En este terreno, el aporte de la derecha radical consiste únicamente en expresar públicamente el gran problema al que se enfrenta el gobierno de la decadencia de Europa, y que consiste en definir dónde se establecerán las líneas de la redistribución social dentro de sus propias fronteras en términos de salarios, servicios de bienestar y derechos. Al fin y al cabo, la «rebeldía» de la derecha radical solo manifiesta su disconformidad con el hecho de que el gobierno autoritario de las fronteras, así como las nuevas políticas punitivistas y securitarias, se sigan recubriendo con el manto hipócrita del discurso progresista y cosmopolita, característico de la burocracia y la clase política europea. Su éxito reside en su capacidad para desmaquillar las políticas autoritarias, y para defender sin complejos la segregación de las poblaciones consideradas «no europeas», esto es, para determinar quiénes están plenamente integrados en la sociedad y quiénes no.